DIARIO

DE LAS

SESIONES DE CORTES.

PRESIDENCIA DEL SEÑOR CALATRAVA.

SESION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 1820.

Se leyó y aprobó el Acta del dia anterior.

Se mandó pasar á la comision ordinaria de Hacienda un oficio del Secretario del Despacho de este ramo, el cual hacia presente que al manifestar á las Córtes el parecer del Gobierno acerca de la conveniencia y utilidad que traeria la separacion de los negocios de Hacienda de Ultramar de los de la Península, se indicaba la necesidad de un cuerpo auxiliar que supliese en la parte informativa lo que antes ejecutaba el extinguido Consejo: que con este fin se habia instruido expediente por el Ministerio, en que se ponian de manifiesto las razones que obraban para adoptar esta medida, proponiendo podria formarse una Direccion de las dos Contadurías, por la copia de conocimientos que poseian, bajo del pié y planta que conviniese, y una instruccion que marcasse sus atribuciones, sobre lo cual se habia oido á la Direccion general de Hacienda de la Península y á los dos contadores de Ultramar; pero aunque convenian en lo sustancial de dicho establecimiento, como el asunto era de suyo de bastante interés y trascendencia, habia creido el Gobierno necesario pasarlo á exámen del Consejo de Estado para que expusiese su dictámen, y pasarlo en seguida á la deliberacion de las Córtes.

A la primera de Legislacion se pasó una consulta del Tribunal Supremo de Justicia acerca de cinco dudas propuestas por la Audiencia territorial de Extremadura. Remitióla el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.

El del Despacho de la Gobernacion de la Península remitió una exposicion y reparto hecho por la Diputacion provincial de Madrid para reintegrar á la Hacienda pública las cantidades que anticipó á los Diputados de las anteriores Córtes, jefe político y su secretaria. Estos documentos se mandaron pasar á la comision de Diputaciones provinciales.

A las de Guerra y ordinaria de Hacienda reunidas se mandó pasar una exposicion documentada que habia hecho al Rey el capitán general de Castilla la Nueva, pidiendo se declarase terminantemente quién habia de presidir las Juntas protectoras de los depósitos de inutilizados en el servicio militar, á fin de que las Córtes se sirviesen tenerlo presente al resolver las dudas que propuso en oficio de 2 de este mes, acerca de la direccion de dichos establecimientos, y medios para sostenerlos.

A propuesta de la Junta Suprema de Censura, nombraron las Córtes para las dos plazas que se hallaban vacantes en la

PROVINCIAL DE NAVARRA.

En clase de secular.

D. Diego María Ciriza, profesor de medicina.

En la de suplente.

D. Manuel Calduroz, catedrático de teología.

Y PARA LA PROVINCIAL DE GRANADA.

En clase de eclesiásticos.

D. Joaquin de Luque, canónigo de aquella catedral.
D. Pedro Jerez, cura teniente del Sagrario.

En la de seculares.

D. José Valverde, relator.
D. Joaquin Durán, individuo de aquella maestranza.
D. Pedro Martínez Coronado, coronel.

En la de suplentes.

D. José Alcántara, canónigo del Sacro Monte.
D. Idefonso Sierra, capitán de ingenieros.
D. José Marin, hacendado.

A la comision de Agricultura pasó una exposicion del ayuntamiento de Benabarre, el cual hacia presente que por la esterilidad y circunstancias de aquellas tierras, y para proporcionar á los vecinos el beneficio de poder colocar ó dar salida á sus ganados, se habian comprometido los propietarios de tierras á dejarlas francas hasta fin de año, excepto el administrador del excusado, que exigió se pusiera desde luego en práctica el decreto de las Córtes en razon de este asunto: que habiendo acudido el ayuntamiento á la Diputacion provincial, declaró no tener autoridad para mandar la observancia contra los que repugnaran; y pedia que las Córtes ordenasen el cumplimiento de aquellas treguas, ligando á todos los propietarios á su observancia hasta fin de año, y aprobasen cierta moderacion hecha por el ayuntamiento en las penas pecuniarias de las denuncias de ganados.

Los sargentos del regimiento provincial de Jaen, y los del de caballería de Lusitania, suplicaban á las Córtes se sirviesen abolir en la nueva ordenanza que habia de darse al ejército, la pena que hasta ahora se ha llamado arbitraria. Su exposicion pasó á la comision de Organizacion de fuerza armada.

A la de Premios se mandó pasar la de D. Nicolás de Avila, vino de Granada, regidor nombrado en 1814 para aquella ciudad, el cual, despues de manifestar lo que habia sufrido por su adhesion al sistema constitucional, y la pérdida de bienes que habia experimentado, suplicaba á las Córtes se dignasen señalarle una moderada pension, ó habilitarle por una vez con una cantidad proporcionada para restablecer su obrador y comercio.

Oyeron las Córtes con especial agrado una exposicion en que la Diputacion provincial de Madrid manifestaba la satisfaccion que le habia resultado al ver decretada la abolicion de las vinculaciones, la extincion de las órdenes monacales, con las demás reformas que tan acertadamente se habian fijado al clero regular que se conservaba. Con este motivo felicitaba á las Córtes, y

manifestando que todavía esperaba ver cumplidos sus deseos en la no menos interesante, justa y necesaria abolicion de los diezmos.

Felicitó tambien á las Córtes la Diputacion provincial de Astúrias por la supresion de mayorazgos, y la provincial de Galicia por esta providencia y la extincion de los monacales. Oyeron las Córtes estas felicitaciones con especial agrado.

Se mandó pasar al Gobierno una exposicion de Don Isidoro Julian Perez, el cual, manifestando que desde el año de 1812 hasta la destruccion del sistema constitucional habia desempeñado el empleo de secretario del jefe político de la Mancha, y que en Marzo último habia sido uno de los que más contribuyeron á que en esta córte se jurase la Constitucion, pedia que se le reintegrase en el dicho empleo de secretario, ó que se le confirmase otro equivalente.

Varios propietarios legos de diezmos de la provincia de Cataluña exponian á las Córtes, con motivo de las indicaciones de supresion que se hacian, los fundamentos en que se apoyaban sus derechos á la percepcion en los distritos de su dominio territorial, para prevenir la ruina y despojo de sus rentas y de sus derechos de propiedad, sobre que afianzaban su subsistencia. Esta exposicion se mandó pasar á las comisiones que entienden en el asunto de diezmos.

Al Gobierno pasó la exposicion de 34 pueblos de la provincia de Segovia, los cuales acudian nuevamente á las Córtes solicitando que se estableciese en San García la cabeza de partido, y no en Villacastin como estaba mandado.

Don Joaquin de March y de Basols, vecino de Barcelona, exponia que su abuelo habia comprado al señor D. Carlos III todos los diezmos, señoríos territoriales, censos, partes de frutos, laudemio y demás derechos que percibian los ex-jesuitas en Cataluña, en lo que habia invertido la cantidad de 300.000 libras catalanas ó 3.200.000 rs.; y que como de abolir los diezmos quedaria la familia del exponente reducida á la mayor miseria, y éste obligado á reintegrar á los compradores de los diezmos las cantidades que percibió su padre, pedia á las Córtes lo tuviesen en consideracion, para que en tal caso se le reintegrase de lo que desembolsó en metálico.

Anunció el Sr. Secretario *Diaz del Moral* que habiendo acordado las Córtes en la sesion secreta de la noche anterior que una diputacion del Congreso pasase á cumplimentar á S. M. con motivo de su feliz cumpleaños, el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, en oficio de contestacion, participaba que el Rey habia señalado la hora de la una del dia para recibir á la expre-

sada diputacion, que se componia, segun la lista que leyó el referido Sr. Secretario, de los

Sres. Giraldo.
Gutierrez Acuña.
Cepeda.
Benitez.
Echeverría.
Montoya.
Florez Estrada.
Solano.
Dolarea.
Loizaga.
Palarea.
Clemencin.
Becerra.
Lázaro.
Cavaleri.
Govantes.
Cantero.
Sancho.
Novoa.
Vargas Ponce.
Losada.
Lagrava.
Lope (D. Manuel) y Couto, Secretarios.

Se dió cuenta del siguiente dictámen:

«Las comisiones de Guerra y primera de Legislacion reunidas han examinado la consulta hecha por el Ministerio de la Guerra sobre el seguimiento de la causa formada para averiguar el suceso ocurrido en el cuartel de Guardias de la persona del Rey en la noche del 8 al 9 de Julio último; y en vista de lo que han expuesto el asesor interino del cuerpo, el Consejo de Estado, y cuanto en su consecuencia manifiesta el Gobierno, creen que las Córtes deben tener presentes para la resolucion de este negocio, la época y circunstancias del suceso, el gran número de personas que se hallan complicadas en la causa, y que sin haber salido todavía del estado de sumaria, se compone ya de tres piezas de autos con cerca de 800 folios; y sobre todo, que se halla mandado por las Córtes que se siga con arreglo á la ordenanza del año de 1769.

Segun ésta, todas las causas civiles y criminales de los individuos del cuerpo, sean actores ó reos, deben juzgarse indistinta y privativamente por el capitán del cuerpo, con acuerdo del asesor, obrando en justicia, consultando con S. M. las sentencias definitivas y autos que tuvieren fuerza de tales, quedando así ejecutoriadas y sin más recurso que á la Real persona.

Todo lo expuesto manifiesta que esta es una causa singular en su origen y circunstancias, y más todavía en el método que se ha mandado seguir en ella; y conceptuando las comisiones que arrojando la sumaria, como dice el asesor en su exposicion, cuanto puede apetecerse, y que es imposible que reciba más luz, y estando desenvueltos en las declaraciones de los presos todos los fundamentos de su defensa, y en las citas que se han evacuado el valor de las probanzas que puedan prometerse, parece á las comisiones que hallándose en su fuerza y vigor la ordenanza citada de 1769, se encuentra en ejercicio toda la autoridad que por ella se concedía á S. M., y que conforme á lo que hasta ahora se ha practicado, puede determinarla; y en su concepto, es en

el caso presente el único medio de evitar los graves males que se seguirán á la disciplina militar y á la multitud de presos que se hallan complicados.

Las comisiones, al proponer su dictámen, no han perdido de vista el origen del suceso, que fué nacido de un celo excesivo, y tal vez mal dirigido, por el bien y la conservacion de la tranquilidad pública: creen igualmente que en la misma sumaria habrá los suficientes datos para formar juicio que los jóvenes complicados ni pensaron ni trataron de otros puntos y objetos que puedan presentarlos con el carácter de criminales de otra naturaleza; y así opinan, que debiendo tener término los sucesos á que los más celosos y patriotas y aun pacíficos ciudadanos se vieron obligados á comprometerse por las críticas circunstancias primeras de nuestros dichos acontecimientos de los meses de Junio y Julio, deben buscarse todos los medios de que así se verifique.

Por lo expuesto opinan las comisiones que las Córtes podrán acordar se manifieste al Secretario del Despacho de la Guerra, que estando S. M. autorizado por la ordenanza de 1769 para determinar esta causa hasta definitiva, podrá ejecutarlo en el estado en que se halla, bien sea acordando su sobreseimiento ó tomando la medida que su justificado y generoso corazon le dicte en favor de los que por tanto tiempo sufren la rigurosa prision en que se hallan, y que sea compatible con la disciplina militar; extendiéndose esta declaracion, como consecuencia necesaria, á las causas mandadas formar á consecuencia de dichos sucesos en el cuartel, por haber tenido el mismo origen, y cuyo seguimiento ofrece los mismos inconvenientes.»

Se aprobó este dictámen.

Se leyó el siguiente:

«El doctor D. José María Jaime, vecino de Granada, ha expuesto á las Córtes: que condenado á presidio por la sentencia que pronunció la Junta de Estado en 22 de Diciembre de 1814, sin más delito en él que su amor á la Constitucion y decidida adhesion á las nuevas instituciones, fué sacado de la cárcel de corte de aquella ciudad con sus compañeros en la causa, individuos del ayuntamiento de aquel año, en la madrugada del 4 de Marzo de 1815, y conducidos todos á un cuarto de legrua de distancia de Granada. Entre diez y once de la mañana se presentó solo el capitán D. N. Morales, comandante de la escolta, quien para ejecutar la orden que decia llevaba del intendente D. Manuel Inca Yupanqui, sacó un cordel que á prevencion tenia, los ató y volvió con ellos á Granada, pasando por las calles principales, hasta llegar á la otra cárcel donde estaba la cuerda de malhechores, con quienes reunidos los volvieron á sacar por las calles públicas, en medio de un numeroso concurso atraido por tan escandalosa novedad. Una desgraciada casualidad hizo que se aumentara la afliccion del doctor Jaime, pues que pasando por la puerta de su propia casa, sus tiernos niños le conocen, le llaman repitiendo el nombre de *padre*... Prescindiendo de las nulidades de la causa, del presidio que con sus compañeros ha padecido hasta la feliz época del restablecimiento de nuestra Constitucion, y pide solamente que, tomando las Córtes en consideracion, y reparando del modo que estimen la infamia, declaren meritorio y honorífico su procedimiento, para que jamás sirva de mancha á su honor, al de sus hijos y al de los demás sus compañeros.

La comision, limitando su informe á lo mismo que el doctor Jaime solicita, aunque sin documentos á que referirse, no obstante, atendiendo á que el hecho fué público y notorio, á que nada pide ni contra el intendente Inca Yupanqui, que segun la relacion parece dió aquella órden al capitán Morales, ni contra éste, ni ningun otro tercero interesado; y en consideracion al largo padecer del doctor Jaime y sus compañeros, y particularmente al modo ignominioso con que fueron conducidos por las calles de Granada, en donde como alcalde constitucional el doctor Jaime é individuos del ayuntamiento sus compañeros eran conocidos de todo el vecindario, opina que las Córtes podian declarar meritoria y honorífica, tanto la causa que se les formó por su adhesion á la Constitucion, como el largo é injusto padecer que han experimentado, y el modo con que fueron tratados: y para dar la más solemne publicidad á esta declaracion, podia el Congreso deliberar que el Gobierno mande que en los libros de la cárcel de córte de Granada, en los del presidio y en el proceso ó expediente se ponga nota bien expresiva de esta declaracion, la cual se publicará tambien en ayuntamiento á puerta abierta, formalizándose la correspondiente acta y dándose á los interesados los testimonios que soliciten, á fin de que sus hijos y descendientes tengan de las Córtes este auténtico testimonio como timbre glorioso de su patriotismo, etc.»

Reprobó el Sr. *Castanedo* la arbitrariedad con que habia procedido el intendente con respecto al doctor Don José María Jaime, y pidió que las Córtes la tomasen en consideracion, á fin de que no se creyese que autorizaban semejantes procedimientos. Contestó el Sr. *Remirez Cid* que la comision proponia lo que el interesado mismo solicitaba, prescindiendo de lo demás; pues seria proceder al infinito si se hubiesen de tomar en consideracion todas las tropelias é injusticias cometidas en aquella triste época. El Sr. *Canabal* manifestó que el intendente no habia hecho más que mandar que los interesados de que hace mérito el dictámen de la comision volvieresen al depósito para que se tomase razon de ellos.

Declarado el punto suficientemente discutido, se aprobó el dictámen de la comision.

Aprobóse tambien el siguiente, de la misma comision de Premios:

«En la sesion pública del 19 del presente se pasó á la comision de Premios una representacion hecha á las Córtes por el abogado D. Domingo Antonio de la Vega, junto con otra de la Sociedad patriótica de Cádiz, ambas manifestando que no se habia hecho mencion de los méritos de Vega en el informe dado sobre las ocurrencias y operaciones del ejército de San Fernando; y en vista de los cuales documentos, contesta la comision lo siguiente:

«La comision fundó su informe sobre los documentos que al efecto se le pasaron; y para no presentar los hechos tan aislados, se propuso formar un bosquejo muy ligero de dichas ocurrencias, particularmente sobre los trabajos que precedieron á ellas; y si ha nombrado algunas personas fuera de las del ejército, ha sido por conceptuarlo indispensable en apoyo de los incidentes á que hacia mencion. Nadie le ha exigido á la comision una crónica de la revolucion de España, ni hay un derecho á quejarse de ella porque haya dejado de nombrar á todos los que han tenido parte más ó menos activa, pues

en su caso quizá no bastaria un volúmen; al paso que si no ha nombrado á D. Domingo Antonio de la Vega, tambien ha guardado silencio sobre otros muchos que han trabajado en esta última época por el buen éxito de este sistema, mayormente cuando todos tienen expedito el camino hácia el Gobierno para hacerle presente lo que tengan por conveniente.

A pesar de todo, hay individuos en la comision que conocen á D. Domingo Antonio de la Vega, á quienes consta ser cierto cuanto expone en su representacion; y tanto los individuos ya dichos de la comision, como todo el que haya tratado á este sugeto y sepa las particularidades de su vida, no podrán negar que es un hombre que reúne calidades eminentes que le hacen digno de la confianza del actual Gobierno, muy capaz del desempeño de cualquier encargo que exija probidad y conocimientos, y que una gran parte de su vida la ha pasado en prisiones, habiendo hecho su ruina y la de su familia, por sostener sus ideas liberales, en toda la extension de la palabra, con la energía y firmeza que le son características; por lo que opina la comision: primero, que las Córtes deben declarar que reconocen y le son gratos los servicios de D. Domingo Antonio de la Vega, y que así conste en el *Diario de Córtes*; segundo, que se le recomiende al Gobierno para que en proporcion á sus conocidos méritos, capacidad y adhesion tan probada al sistema constitucional, pueda colocarle útilmente.»

Se aprobó este dictámen.

Se dió cuenta del siguiente:

«Las comisiones primera de Legislacion y de Diputaciones provinciales han visto la representacion del ayuntamiento constitucional de la ciudad de Málaga, en la que expone la necesidad de nombrar una Diputacion provincial, porque declarada provincia independiente, han acudido todos los pueblos de su demarcacion con sus correspondencias. Sevilla ha pasado los expedientes de los partidos que antes le pertenecian, y todo el órden se halla obstruido, ya sea que estén detenidos ó que se remitan á Granada para su resolucion. Por todo lo cual, pide que se le reunan allí los electores de Diputados en Córtes por los partidos que hoy componen aquella provincia, y elijan la Diputacion provincial. Pide tambien la formacion de Junta de Censura, y que mientras llega allí el jefe político desempeñe sus funciones su alcalde constitucional.

Las comisiones opinan que en atencion á las extraordinarias circunstancias en que se halla la provincia de Málaga, se comuniquen órden al jefe político, y en su defecto al alcalde primero constitucional, para que convoque á los electores de los partidos que componen por ahora esta nueva provincia, incluyéndose los de los partidos que tienen algunos pueblos que corresponden aún á la de Granada y Sevilla, para que nombren la Diputacion provincial de Málaga, la cual pueda desde luego proceder á la formacion de partidos; y respecto á que por el partido de Antequera fué elector el Sr. D. Pedro Muñoz, que en la actualidad es Diputado en las Córtes, ocupe su lugar el que despues de S. S. tuvo más votos para ser elector; y que si resultase elegido vocal de la Diputacion de Málaga alguno que actualmente lo estuviere siendo en las Diputaciones de Sevilla ó Granada, pase á serlo de la de Málaga, subrogándose en éstas los suplentes.

En cuanto á la Junta de Censura, las comisiones no

encuentran inconveniente en que se suspenda su formacion, respecto á que en virtud de la ley de libertad de imprenta deberán cesar las establecidas; y en cuanto á jefe político, deberá observarse el reglamento para el gobierno político de las provincias.»

Leído este dictámen, se opuso el Sr. *Victorica* á que se suspendiese en Málaga la formacion de Junta de Censura; y no hallando inconveniente en ello las comisiones que habian extendido el dictámen, se aprobó, á excepcion de la parte en que trata de la indicada Junta de Censura.

Presentó el Sr. *Cepero* la siguiente exposicion:

«Señor: Fr. Policarpo de Jerez, capuchino, con la mayor veneracion expone al augusto Congreso cuánto le ha sido sensible la representacion del general de su órden, que por sostener su gerarquía ha desairado los altos derechos del Poder legítimo. No es decoroso al súbdito recriminar el extravío de su Prelado, al que tampoco puede echar un velo por la notoriedad del hecho y por la trascendental influencia que sorprenda á los incautos y alarme á los desafectos. Pero siendo cierta la oportuna observacion del Sr. Diputado *Martel* «que los súbditos de este general no es posible participen de semejantes ideas, y que casi todos ignorarán este paso vergonzoso,» no puede menos el exponente de hacer ostension de esta verdad, acreditando de su parte su decidida adhesion á las sábias determinaciones del Congreso.

Desde el año de 1812, que se hallaba morador en la ciudad de Jerez de la Frontera, se dedicó á promover el conocimiento y la observancia de la Constitucion, no solo de palabra, sino por escritos que hizo públicos; y reuniendo las firmas de 60 vecinos de la mencionada ciudad, elevó, con fecha 11 de Marzo de 1814, una felicitacion á las Córtes por el memorable decreto de 2 de Febrero, cuya expresion gratulatoria, oida con agrado, mereció el honor de ser estampada íntegra en el *Diario*. En el precitado año el día 27 de Abril predicó en la iglesia de Belén contra el atentado de algunos militares y plebe por haber apeado con ignominia la lápida constitucional, y desde este momento recrecieron contra el exponente los ódios de los serviles, amenazando su vida. Proscrito tambien por los de su profesion, se trasladó á este punto, suspirando en los seis años de exterminio la restauracion del sagrado Código y de las Córtes.

Oyó el Altísimo sus votos, y al presentarse el ejército libertador en esta ciudad, fué el único de su clase que amparando sus ideas constitucionales animaba á los débiles é indecisos en todas las funciones de su ministerio, aun por las calles y plazas, en los días de mayor angustia, como todo es notorio y consta á algunos dignos Diputados del Congreso. Tales son las ideas del que expone, muy en oposicion á las de su general, que crasamente equivocado y poseido de un celo indiscreto, no solo ha ofendido á la majestad del santuario de las leyes, sino á su misma congregacion y á cada uno de sus individuos, dignos por su incomplicidad de que el augusto Congreso no les mire sin compasion. Así lo suplica y espera de la generosidad de las Córtes el que deseando reunir en sus sentimientos á todos los capuchinos españoles, tributa la más expresivas gracias por haber abolido el sábio Congreso los capítulos, gérmen de la relajacion de los cláustros, porque en ellos, por testimonio del venerable P. Fr. *Diego* de Cádiz, se fomentan los partidos y las conveniencias del nepotismo ó fami-

lias, desatendiendo el mérito y la justicia. Dios Nuestro Señor bendiga los religiosos afanes del inmortal Congreso para el bien de la Nacion y prosperidad de la religion católica en toda su pureza y magestad. San Fernando 6 de Octubre de 1820.—Señor.—Fr. Policarpo de Jerez.»

Leída esta exposicion, recomendó el Sr. *Quiroga* los servicios y patriotismo de su autor, confirmando cuanto en ella exponia; y las Córtes la oyeron con especial agrado, mandando que se insertase en este *Diario de sus Sesiones*.

Leyóse el siguiente dictámen de la comision de Guerra:

«La décima facultad que el art. 131 de la Constitucion señala á las Córtes, es fijar todos los años, á propuesta del Rey, las fuerzas de tierra y de mar, determinando las que se hayan de tener en pié en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra. En cumplimiento de esta ley, ha presentado el Secretario del Despacho de la Guerra en 1.º de Agosto una Memoria en que propone la fuerza y organizacion para el ejército permanente en el presente año, y el aumento que deberá tener en caso de guerra, del modo siguiente:

<i>Para tiempo de paz.</i>	HOMBRES.
Real compañía de alabarderos,	153
Guardia Real, dos regimientos, seis batallones.	4.200
Infantería de línea, 37 regimientos, 74 batallones.	37.000
Ligera, 14 batallones.	7.000
	48.353
Guardias de la Real Persona.	600
Carabineros Reales.	545
Caballería de línea, 10 regimientos.	5.150
Caballería ligera, 12 regimientos.	6.180
	12.475
Artillería.	5.000
Zapadores.	1.000
	66.828

Sin variar para el caso de guerra el número de los cuerpos, se aumentará su fuerza hasta 124.579 hombres, en esta forma:

Guardia Real.	6.000
Infantería de línea.	74.000
Ligera.	14.000
	94.000
Carabineros Reales.	793
Caballería de línea.	7.930
Caballería ligera.	9.516
	18.239
Artillería.	10.340
Zapadores.	2.000
	124.579

La comision de Guerra ha leido con la mayor detencion esta propuesta, y cree conveniente llamar la atencion de las Córtes hácia las principales observaciones que le ha ofrecido su exámen respecto de la fuerza y or-

ganizacion del ejército, y de algunas mejoras que el Ministerio propone, y de otras que la comision cree indispensables. La distancia, en primer lugar, de nuestras provincias ultramarinas, su estado turbulento en muchos puntos, la incertidumbre de los efectos políticos que producirá nuestra feliz restauracion, y de las providencias que en consecuencia se habrán de adoptar para restituir la paz á aquellos desgraciados países, habrán sido quizá la causa de no hablarse de ellos en esta Memoria, ni de las tropas que los guarnecen. Por manera que los 66.828 hombres que se piden en tiempo de paz, y los 124.579 en el de guerra, se entiende solo para la conservacion del orden y defensa de la Península y posesiones adyacentes. Y aun debieran añadirse á la segunda suma los 600 guardias y la compañía de alabarderos, que la harian subir á 125.332 hombres.

Dedúcese de aquí que si se licencian los 4.500 hombres que han cumplido su empeño hasta 1.º de Enero de este año, como exige imperiosamente la justicia y la conveniencia pública, quedará reducido el ejército permanente á poco más de 54.000 hombres; y otorgando al Gobierno los 125.000 que pide en tiempo de guerra, era preciso autorizarle para hacer un reemplazo forzoso de más de 70.000 hombres, materia en que las Córtes serán indudablemente muy circunspectas.

La comision, sin embargo, se abstiene de hacer nuevas reflexiones sobre este punto, porque está firmemente persuadida de que en el actual estado de la Europa, y restablecido apenas en España el régimen constitucional, si llegase el Rey á persuadirse del rompimiento de una guerra antes del mes de Marzo próximo, no podría menos de considerar el negocio como muy árduo, y á la Nacion en las críticas circunstancias que previene el art. 162 de la Constitucion, para disponer la convocacion de Córtes extraordinarias, en caso de que no se hallasen reunidas. Entonces conoceríamos la clase de guerra que deberíamos hacer, y el poder y las miras del enemigo que tendríamos que combatir determinarían el aumento que convendría dar al ejército.

Aun sin temores de guerra, seria preciso decretar ahora un sorteo de más de 12.000 hombres para completar el ejército propuesto al pié de paz; y acaso no seria muy político exigir en la actualidad tan penoso sacrificio de los pueblos, si no es del todo necesario. Por otra parte, el Sr. Secretario del Despacho de la Guerra propone en otra Memoria de igual fecha que el reemplazo del ejército permanente se verifique en 1.º de Mayo todos los años; y si ahora se decretase el que corresponde al presente, no se verificaria ya hasta fines de él, y se repetiría por dos veces en brevísimo tiempo esta operacion gravosa siempre á los pueblos.

Pero no es posible desconocer que seria muy arriesgado privar al Gobierno en las actuales circunstancias de los medios que pide para atender á la defensa y seguridad interior del Estado, de que es responsable; y debiendo quedar reducida la fuerza efectiva del ejército permanente á 54.000 hombres despues de licenciados los cumplidos, cree la comision que el único medio para ocurrir á todas las dificultades seria autorizar al Rey para que en caso de una urgentísima é imperiosa necesidad pueda disponer de algunos cuerpos de Milicias provinciales, cuya fuerza no excederá por ningun pretesto de 12.000 hombres. De este modo, el presupuesto de los gastos del ejército ha tenido una rebaja considerable; porque no es de presumir que el Gobierno se vea en la dura necesidad de usar, al menos en toda su extension, de la facultad que aquí se le concede.

Pocas dificultades puede ofrecer la organizacion que se da al ejército; porque como existen actualmente más de 3.000 oficiales y 1.000 sargentos sobrantes, ninguna economía resultaria al Erario en disminuir el número de cuerpos que propone el Ministerio, que viene á ser igual al que ahora existe, despues de reunidos á sus cuerpos los segundos batallones de la expedicion de Ultramar, y de refundir en sus respectivos cuadros los que se crearon de nuevo para este fin.

No debe sin embargo pasar en silencio la comision que los cuatro individuos que hay en ella, pertenecientes á los cuerpos de artillería é ingenieros, han creido que la instruccion metódica y científica que necesitan adquirir los soldados de estos cuerpos no permite que se haga en ellos un aumento tan repentino del tiempo de paz al de guerra como propone el Ministerio. Pero semejante cuestion no es de este momento, y las Córtes determinarán lo conveniente sobre el particular cuando decreten el reemplazo del ejército.

La principal reforma que se deduce de la Memoria del Secretario del Despacho, es la extincion de los tres regimientos de suizos que existen actualmente al servicio de la Nacion con 1.121 plazas; y seria ofender demasiado la sabiduria de las Córtes insistir en demostrar cuán conforme es esta medida al espíritu del sistema constitucional.

Pero al mismo tiempo que se decrete semejante reforma, es de la más rigorosa justicia indemnizar á quien tenga derecho de todos los perjuicios que puedan resultar segun las contratas vigentes, satisfaciéndose los atrasos á todos los individuos que componen ahora dichos cuerpos, y admitiendo al servicio en los cuerpos nacionales con sus respectivos empleos á los que lo soliciten, obteniendo carta de naturaleza segun el art. 5.º de la Constitucion.

Tambien se supone suprimido en la Memoria del Ministerio el regimiento Fijo de Ceuta, cuya viciosa constitucion debe desaparecer para siempre del cuadro glorioso de un ejército de ciudadanos.

Al recorrer la comision el cuadro de nuestro ejército, y los vicios de que adolece la forma de algunos cuerpos, no puede dejar de llamar la atencion de las Córtes hácia la Guardia de caballería de la persona del Rey, ruinosa por su excesivo coste, y perjudicial en gran manera á todo el ejército. La comision no duda que en nuestro actual sistema debe existir una Guardia Real para mantener el decoro y esplendor del Trono; pero cree que debe ésta organizarse de modo que sirva de estímulo y premio á todas las clases del arma respectiva, consultando al propio tiempo la conveniente economía. La comision espera, pues, que para preparar esta utilísima variacion dispondrán las Córtes que no se dé ninguna bandolera, y se suspenda la provision de los empleos vacantes, que se faciliten salidas á todas las clases con proporcion á los servicios de cada individuo, y que se sujete el cuerpo á las reglas de buena administracion y economía que rigen en los demás del ejército.

Por último, tambien es digna de la atencion de las Córtes la actual constitucion de la brigada de carabineros, que cuesta mucho al Erario, y por sus mal entendidos privilegios no hace absolutamente ningun servicio en tiempo de paz.

Por todas estas consideraciones ha creido la comision deber presentar á las Córtes el siguiente proyecto de decreto:

Artículo 1.º Se aprueba la propuesta para la orga-

nizacion y fuerza del ejército permanente, presentada por el Secretario del Despacho de la Guerra en 1.º de Agosto, con las modificaciones que expresan los artículos siguientes.

Art. 2.º Se licenciarán todos los cumplidos hasta 1.º de Enero último, incluso los cabos y sargentos que lo soliciten, aunque hayan perdido su tiempo.

Art. 3.º No se verificará el reemplazo del ejército por medio del sorteo en el presente año, si circunstancias extraordinarias no obligasen á las Córtes á decretar otra cosa.

Art. 4.º Se autoriza al Gobierno para que en caso de una absoluta imposibilidad de cubrir las atenciones indispensables del servicio militar con la fuerza á que queda reducido el ejército permanente, disponga de los cuerpos de Milicias provinciales que se necesiten, hasta el número de 12.000 hombres, cuidando de que esta carga se reparta con la posible igualdad entre todas las provincias.

Art. 5.º Se extinguirán los tres regimientos de suizos que actualmente existen al servicio español: la Nación indemnizará todos los perjuicios que segun las contratas vigentes ocasione esta medida.

Art. 6.º Los individuos de estos regimientos que quieran continuar al servicio de España, serán incorporados en los cuerpos nacionales con sus actuales empleos, pero habrán de pedir carta de naturaleza.

Art. 7.º Tambien se extinguirá el regimiento Fijo de Ceuta.

Art. 8.º Debiendo organizarse bajo otro pié la Guardia Real de caballería, el Gobierno procederá á reformar el actual cuerpo de Guardias de Corps en los términos que menos perjudiquen á los individuos que lo componen, adoptando desde luego las disposiciones siguientes:

1.ª No se dará ninguna bandolera, ni se proveerá ningun empleo vacante.

2.ª Se facilitará á todo el que la pida una salida proporcionada á sus servicios y circunstancias.

3.ª Se concederá el retiro con su grado y fuero criminal á todo guardia que lo solicite, aunque no le corresponda por reglamento.

4.ª El cuerpo de Guardias pasará revista mensual de comisario como los demás del ejército, y no percibirá más haberes ni raciones que las de las plazas y caballos que resulten presentes ó como presentes.

5.ª El Gobierno propondrá los medios de organizar la Guardia Real de caballería de manera que sirva de estímulo y premio á los individuos beneméritos de esta arma.

Art. 9.º La brigada de carabineros hará desde ahora el mismo servicio que los demás cuerpos de su arma, sujetándose en esta parte á las ordenanzas generales del ejército.»

Concluida la lectura de este dictámen, acordaron las Córtes su impresion; y en seguida hizo el Sr. Sanchez Salvador una indicacion concebida en estos términos:

«Respecto á que está determinado en el presupuesto de Guerra el número de generales, colocando los excedentes en lo eventual, pido á las Córtes digan al Gobierno no se ascienda ni promueva á ninguno mientras haya excedentes, para que se disminuyan los gastos del Estado y pueda atender en lo sucesivo á aumentar los sueldos de esta benemérita clase, que goza los mismos que en el reinado de Felipe V, aunque todas las clases militares y civiles han tenido aumentos.»

A propuesta del Sr. *Presidente* se suspendió tratar de esta indicacion hasta que se discutiese el dictámen de la comision.

Tomóse igual resolucion con respecto á la siguiente, del Sr. Quiroga:

«Que las licencias absolutas sean extensivas á los batallones primero de Cataluña y Málaga, que de resultas de la causa de 8 de Julio fueron á la Habana.»

Dióse cuenta á continuacion del siguiente dictámen de la comision ordinaria de Hacienda, que fué aprobado por las Córtes sin discusion:

«La comision ha visto detenidamente el expediente que se le pasó en 4 de Octubre, relativo á la solicitud de los padres de la congregacion de San Felipe Neri de Cádiz para que se les abonen los 88.094 rs. y 12 mrs. vellon que á más de las limosnas han expendido en las obras de su iglesia y casa para ponerlas en estado de uso. De este exámen resulta que en 29 de Marzo de 1814 pidieron á las Córtes permiso para ocupar su santo templo, cuyas bóvedas sirvieron de cubierta, en medio de los continuos y dilatados tiros de las bombas del enemigo, para que el Congreso dictase el sábio Código que nos rige. Penetradas las Córtes de tan justa solicitud, acordaron en sesion pública de 9 de Abril de 1814 que se repusiese la iglesia por cuenta del Erario en el estado que se hallaba antes que la ocupasen. Sin embargo, el preposición y congregacion, para aliviar al Erario en tiempo de tanta escasez, se dirigió con esuelas á implorar la caridad de los devotos. Efectivamente, logró recoger 37.922 rs. por medio de una piadosa suscripcion. Como el total de la obra habia costado 126.977 rs. 12 mrs., rebajada la suma recolectada por la suscripcion, aparece en favor de la congregacion, ó de D. Tomás Urrutia que hizo el suplemento, la cantidad de 88.094 rs. y 12 mrs. vellon, como lo hace constar en los documentos que acompaña.

El preposición, en la exposicion que hace á las Córtes en 26 de Setiembre de este año, propone como arbitrio más expedito, por falta de dinero, el que se le reembolse en una cantidad de azogue equivalente, colocada en frascos de fierro, al mismo precio que la Hacienda pública lo vende en las Atarazanas de Sevilla.

A la comision, en vista de todo, le parece que se le abone á la congregacion la cantidad de 88.094 rs. y 12 maravedís vellon, como lo habia acordado el Congreso en 14 de Abril de 1814, ya sea en dinero ó en azogue.»

Llamó la atencion del Congreso el Sr. *Diaz del Moral* recordando que hacia cosa de un mes que la Diputacion provincial de Granada habia hecho una exposicion á las Córtes pidiendo se sirviesen abolir un impuesto que se conocia solo en aquella provincia, llamado censo de poblacion, establecido en tiempo de la conquista por los Reyes Católicos. Expuso lo gravoso de aquel impuesto, que además de ser contrario á la Constitucion, arruinaba á muchas familias por su naturaleza, modo de exigirse y condiciones con que estaba impuesto. Fundado en lo cual, y en que estaba próximo el Congreso á cerrar sus sesiones, y en que podria reconvenirse á los Diputados de Granada si no reclamaban la resolucion de las Córtes antes de que se concluyese la presente legislatura, excitó el celo de los señores individuos de las comisiones primera de Legislacion y ordinaria de Hacienda á que se sirviesen despachar su dictámen á la mayor brevedad, con cuyo objeto hizo la siguiente indicacion:

«Que se encargue á las comisiones de Legislacion y ordinaria de Hacienda despachen con la brevedad que permite el cúmulo de los negocios confiados á su exámen, el expediente sobre abolicion del censo llamado de poblacion, conocido solo en la provincia de Granada.»

Como dijese al autor de esta indicacion que el expediente á que se referia se hallaba en poder del señor Banquero, individuo de las indicadas comisiones, la retiró, expresando que no dudaba de que un Diputado electo por Granada se apresurase á despachar un asunto tan útil á un país que le habia nombrado para promover los intereses de la Nacion.

Se dió cuenta en seguida de una exposicion del regimiento de infantería de la Milicia Nacional de esta córte, concebida en estos términos:

«Señor: El regimiento de infantería Voluntarios Milicia Nacional de esta córte, que ha dado las pruebas más sinceras de subordinacion y adhesion al sistema que felizmente gobierna, tiene el sentimiento de no conservar en su cuartel las banderas que en el dia de mañana bendice y jura, pues que, con arreglo al art. 72 del último reglamento de las Córtes, parece deben quedar depositadas en las casas consistoriales.

El nombre que le distingue y los servicios que ha hecho, y sin duda alguna hará, siempre que su Pátria le llame, son los fundamentos de su solicitud, reducida á suplicar al Congreso se sirva concederle la gracia de tener sus banderas juradas en su cuartel, que es el punto de reunion para todas sus formaciones, así como las tendria en el caso que las hubiese jurado con anterioridad á la publicacion del referido reglamento, respecto á que el de las Córtes de 1814, bajo el cual está organizado este cuerpo, no contiene aquella condicion.

Madrid 14 de Octubre de 1820. = Por la clase de capitanes del primer batallon, Benito Marracci. = Idem por la del segundo, Juan Antonio Castejon. = Por la de ayudantes, Pedro del Castaño. = Por la de tenientes del primer batallon, José María Morente. = Idem del segundo, Diego Manuel de Palacio. = Por la de subtenientes del primer batallon, José de Sedano. = Idem del segundo, Saturnino Lozano.»

Esta exposicion se mandó pasar á la comision de Milicias Nacionales.

Continuó la discusion de la segunda base propuesta por la comision de Hacienda (*Véase la sesion extraordinaria de la noche del 13 del actual*); y tomando la palabra, dijo

El Sr. **VICTORICA**: Cuando las Córtes tratan de aprobar la modificacion de los diezmos como una de las bases que debe tener presentes la comision para proponer en la legislatura del año próximo el arreglo general de la Hacienda pública, creo conveniente fijar con toda exactitud un principio cierto sobre el origen de los diezmos y la obligacion de pagarlos, á fin de no incurrir en uno de dos extremos, á saber: el de considerar á los diezmos como una verdadera contribucion impuesta para satisfacer ciertas necesidades del Estado, ó el de mirarlos como un precepto divino que todos los fieles cristianos están obligados á cumplir.

Si se considera á los diezmos como una verdadera contribucion en el sentido estricto que se da á esta palabra, es preciso decir que, con arreglo al art. 339 de la Constitucion, todos los españoles están obligados á pa-

garlos con proporcion á sus facultades, y por consiguiente habria que establecer un nuevo sistema, por el cual todas las tierras, cualesquiera que fuesen sus frutos, contribuyesen con una cuota igual y proporcionada. Si, por el contrario, se mira como un precepto divino la obligacion de pagar los diezmos, es neccsario convenir en que las Córtes no tienen facultades para hacer en ellos la menor modificacion. Por fortuna, cualquiera que se halle medianamente instruido en la historia general, y en la particular de nuestra España, sabe muy bien á qué debe atenerse en esta materia, y ya se hallan muy lejos aquellos tiempos tenebrosos en que se profesaban los principios sentados anoche por el Sr. Lobato en su larga disertacion, negando en cierto modo á las naciones la facultad de disponer de los diezmos. Para combatirlos no molestaré yo al Congreso con la repeticion minuciosa de cuanto se ha dicho por varios Sres. Diputados en esta discusion y en la que ya tuvimos en el mes de Julio. La materia es de suyo tan clara, está ya tan controvertida entre todos los escritores de derecho canónico y civil, y se ha fijado sobre ella de un modo tan uniforme la opinion de la Europa, que es muy raro encontrar una ú otra persona en quien pueda tanto la preocupacion ó el deseo de conservar sus comodidades á costa del sudor del pueblo, que se atreva á cerrar los ojos para no ver la luz, y á singularizarse en términos de comprometer su misma opinion.

Yo seguiré el camino más corto que sea posible para confundir de una vez al pequeño número de rabiosos ultramontanos que todavía existen en España, y entre los cuales no cuento á nuestro amable compañero el Sr. Lobato, cuyo carácter de bondad y moderacion nos es tan conocido. Ellos ni nadie podrán negar que la obligacion de pagar los diezmos está fundada en una ley. Es preciso, pues, antes de todo buscar esta ley que obliga á los hombres á desprenderse de una parte de lo que han adquirido con su trabajo. Echemos una rápida ojeada sobre las diversas fuentes de donde puede nacer la obligacion de pagar los diezmos, y veremos cuál es el resultado. Este es el mejor medio de apurar la verdad y de reducir á un estrecho círculo á los que pretenden aún sostener doctrinas equivocadas y perjudiciales. ¿Nacerá por ventura esta obligacion del precepto impuesto por Dios á los israelitas en el Antiguo Testamento? Los señores que me han precedido en esta discusion, y los que hablaron en la del mes de Julio, han demostrado que no, valiéndose de unas reflexiones tan claras y sencillas, que parece imposible que haya hombre tan preocupado que las desconozca. Causa admiracion el ver cómo el Sr. Lobato ha tenido valor para pronunciar en el Congreso de un pueblo libre unas ideas tan rancias, que no se atreveria á producirlas el más iluso maestro de un convento en una cátedra pública donde se le pudiese contradecir. Yo no repetiré lo que se ha dicho para manifestar que nada tenemos nosotros que ver con lo que se dispone sobre este punto en el Deuteronomio ni el Levítico, y pasaré á demostrar brevemente que ni en el Nuevo Testamento se nos intima á los cristianos la obligacion de pagar los diezmos, ni se concede á la Iglesia la facultad de imponer esta carga para el mantenimiento del culto y de sus ministros.

Todos los textos que suelen citarse para probar el derecho que tienen los sacerdotes á ser mantenidos por los fieles, son aplicables á los individuos de cualquiera otra profesion, aunque no sea tan importante ni elevada, y nadie podrá manifestar uno solo que remotamente trate de la obligacion de contribuir con la décima parte

de los frutos de la tierra. Si le hubiese habido en el espacio de tantos siglos como se están amontonando las más inconexas doctrinas para sostener esta contribucion, no habrian dejado sus defensores de citarle y de apoyarse en él muy particularmente. Que el mercenario es digno del precio de su trabajo, y que el que sirve al altar debe vivir del altar, es cuanto se dice en el Nuevo Testamento, que haya parecido más concluyente en la materia; y esto ya se ve que no significa otra cosa sino el derecho que tiene cualquiera á ser mantenido por aquellos en cuyo favor trabaja; lo cual dista mucho de una prestacion tan exorbitante como los diezmos, que si se impuso por Dios en el Antiguo Testamento, fué por circunstancias particulares á aquel pueblo extraordinario, á quien él mismo dió leyes civiles, y en el cual toda una tribu se quedó sin parte en la distribucion de las tierras. Pero aun hay más: es imposible encontrar en el Evangelio el precepto de pagar los diezmos, porque es repugnante al espíritu que en él domina y á la conducta observada por el Divino Fundador. Este dijo expresamente que su reino no era de este mundo, que no venia á mezclarse en las cosas de la tierra, y que nadie le habia constituido repartidor de los bienes humanos. ¿Cómo, pues, habia de establecer una ley mandando pagar los diezmos? Y ¿á quién habian de pagarse? ¿Por ventura á los Apóstoles y á sus discípulos? ¿Qué semejanza tienen con la tribu de Leví los escogidos para correr el mundo y predicar el Evangelio á toda criatura? ¿No hubiera sido mezclarse directamente en las relaciones más interesantes de la sociedad civil, el mandar que se contribuyese á los ministros de la Religion con la décima parte de los frutos? ¿Hubiera sido este buen medio de hacer prosélitos? Pero no nos cansemos: el sublime mérito de la religion cristiana consiste en que puede aplicarse á toda clase de gobiernos, porque no altera en cosa alguna las leyes de la sociedad; y por esta razon son perjudiciales á la religion misma los ministros indiscretos, ignorantes ó interesados, que pretenden que el Evangelio diga lo que jamás dijo ni pudo decir.

De lo dicho se infiere que la Iglesia no recibió de su Divino Fundador la facultad de imponer á los cristianos la obligacion de pagar los diezmos. Para ejercer esta facultad es preciso tener autoridad sobre los bienes temporales, cosa que jamás pretendieron los Apóstoles, ni sus sucesores en los primeros siglos, en que no se habian alterado aún las verdaderas ideas en este punto. El trastorno que recibió despues la autoridad eclesiástica, es hijo de la ignorancia y de la barbárie de los siglos medios, en cuyo tiempo se fraguaron las falsas Decretales y se celebró esa muchedumbre de Concilios, casi todos extranjeros, que ha citado el Sr. Lobato, los cuales ninguna autoridad tuvieron para mandar pagar los diezmos, pues es indudable que los Concilios no pueden tener más autoridad propia que la que Jesucristo les dió. Algunos de ellos podrian ocasionar una obligacion civil, por haber tenido parte los Reyes en sus resoluciones ó haberlas aprobado; pero esto solo manifestaria la existencia de una ley civil que las Córtes pueden derogar ó modificar como les parezca. El mismo Concilio Tridentino, en esta parte, no tiene más autoridad que los otros: solo debe observarse en cuanto la potestad temporal lo consienta. Los Padres de Trento no fueron superiores á los Apóstoles, ni tuvieron otras facultades que las que á éstos les concedió el Divino Maestro, y en ellas nadie podrá ver la de imponer contribuciones, ni gravar á las tierras con prestaciones onerosas. Si la autoridad eclesiástica tuviese esta facultad, tambien tendria la de man-

dar que á los ministros del culto se les contribuyese con cierta suma de dinero, ó se les prestase otro servicio temporal. ¿Y seria esto conforme á la soberanía é independencia de las naciones? Pero no hagamos á nuestra santa religion una injuria que solo le hacen los que se jactan de sus defensores, porque prefieren sus preocupaciones ó su interés al verdadero ensalzamiento de la Iglesia.

Las mismas épocas en que se han establecido los diezmos, prueban que la obligacion de pagarlos no puede proceder sino de la ley civil. En Castilla no se conocieron legalmente hasta despues que las leyes de Partida insertaron varios trozos de las Decretales; y en las provincias de la Corona de Aragon, particularmente en Cataluña, se introdujeron de un modo que prueba hasta la evidencia su origen enteramente civil. Los Reyes y los grandes señores se los apropiaron como fruto de sus conquistas ó como premio de sus servicios: se dieron en dotes, se enajenaron de varias maneras, y los monasterios se enriquecieron tambien con grandes donaciones de diezmos que les hizo la piedad de los poderosos, que juzgaban por este medio dar á Dios gracias por sus triunfos contra los sarracenos, ó redimir sus pecados. Los párrocos se mantenian con lo que se les queria dar por estos ricos poseedores: de modo que se puede asegurar que jamás ha existido á favor de ellos en Cataluña la presuncion de derecho que establecen las Decretales como un principio.

Resulta, pues, que la ley civil es quien solamente puede imponer una carga como la de los diezmos, los cuales pueden ser modificados por las Córtes del modo que lo consideren útil. Me hubiera abstenido de decir lo poco que he manifestado en la materia, por considerarlo superfluo, si no hubiese leído estos dias una circular del muy Rdo. Arzobispo de Valencia, de 24 de Setiembre último, en la que se trata de resucitar doctrinas que en boca de un Prelado pueden alarmar al pueblo sencillo y desacreditar anticipadamente cualquiera resolucion que tomen las Córtes. En ella se dice que los diezmos son debidos á Dios, que son uno de los más graves preceptos de la Iglesia, y que deben reputarse ladrones y sacrilegos los que valiéndose de varios pretestos la despojan de una cosa que le pertenece á ella y á los que por concesiones apostólicas tienen derecho de percibirlos. Podrá decirse que la diatriba no se dirige contra las autoridades que modifiquen los diezmos, sino contra los particulares que dejan de pagarlos; pero siendo verdaderas las doctrinas que se sientan en la circular, comprenderia á unos y á otros. Yo bien sé que no todos los Obispos de España piensan así, y confinante con Valencia está el Sr. Ros, Obispo de Tortosa, que en una obrita que publicó en 1793 manifestó cuál era la verdadera naturaleza de los diezmos, y dijo lo bastante para demostrar el indisputable derecho que tiene sobre ellos la autoridad civil. Pero no todos están igualmente instruidos, y un Prelado de una de las primeras iglesias de España puede hacer mucho daño predicando doctrinas capaces de desacreditar á la potestad legislativa de la Nacion, pintándola como usurpadora de los derechos de la Iglesia.

El Sr. Lobato, como Diputado, es inviolable en sus opiniones y puede decir cuanto juzgue conveniente. Los folletistas tambien deben tener amplia facultad para criticar y censurar, pues no faltará quien les responda y los confunda; pero un Prelado es un funcionario público, que en sus escritos oficiales no puede contrariar las resoluciones del Gobierno, y mucho menos contribuir á su desobediencia y descrédito. Los ministros del culto en materias civiles como esta no pueden obrar con inde-

pendencia del Gobierno, sin introducir en la sociedad el más espantoso desorden. Es preciso que se convenzan nuestros Prelados y nuestro clero de esta máxima fundamental; pues de lo contrario no seguirán el verdadero espíritu de la religion, darán fomento á la prevencion injusta que se tiene contra el catolicismo en otros países, y tal vez por su tenacidad y funestas pretensiones introducirán en el nuestro la discordia civil y la anarquía, que no sabrá distinguir en sus estragos lo sagrado de lo profano. ¿Qué quiere decir el Sr. Arzobispo de Valencia cuando asegura que los diezmos son debidos á Dios? ¿Por ventura no debemos á Dios cuanto somos, cuanto tenemos y cuanto valemos? ¿Tendrá Dios en los diezmos un dominio más particular y más extenso que el que tiene en todas las cosas?... Pero dejemos al Gobierno el cuidado de rectificar las ideas de la circular del muy Rdo. Arzobispo de Valencia, si lo considera preciso, y aprobemos la base propuesta por la comision, á fin de que haciéndose en los diezmos la modificacion que reclama el interés público, pueda presentarse en la legislatura próxima el sistema de Hacienda más arreglado y perfecto que sea posible.

El Sr. **LOBATO**: Padece dos equivocaciones el señor Victorica: primera, en suponer que yo en mi voto doy por asentado que el Congreso ó la Nacion no tiene facultad para disponer de los diezmos de manera alguna; y la segunda, que las doctrinas que se expresan en él son ultramontanas é inadmisibles por lo mismo en España. En cuanto á lo primero, ni ahora ni jamás he negado yo que la Nacion ó el Congreso tengan aquella facultad en los casos y en circunstancias en que puede y debe usar de los bienes y rentas de todo ciudadano, con la igualdad proporcional que prescriben los artículos de la Constitucion citados en mi voto; pues tanto unos como otros están á discrecion de la Nacion, cuando ésta se halla en absoluta precision de echar mano de ellos para ocurrir á sus urgencias y grandes necesidades.

Y en cuanto á lo segundo, yo no sé si el Sr. Victorica es de más allá ó de más acá de los montes, pues yo no conozco á S. S. sino por sus máximas y opiniones. Pero al ver que S. S. niega que haya leyes positivas de la Iglesia que manden terminantemente el pago de los diezmos, yo quiero preguntarle si ha leído alguna vez los catecismos de Astete y de Ripalda, en donde entre los mandamientos de la Iglesia se coloca uno con la obligacion de pagar diezmos y primicias á la Iglesia de Dios; cuya ley está tomada de los Concilios que se tocan en mi citado voto, así generales como particulares, nacionales ó extranjeros, cuyas doctrinas han sido adoptadas por los nuestros y estampadas de un modo claro, terminante ó indudable en el Tridentino, sin que hasta ahora hayan sido atacadas con las censuras que las ataca el Sr. Victorica, ni en España hayan dejado de correr con libertad, como dictadas, apoyadas y mandadas observar generalmente bajo las penas señaladas en el lugar del Concilio ya citado; admitidas, practicadas y mandadas tambien ejecutar en su caso por las potestades civiles ó seculares, conformándose en un todo con lo dispuesto por la Iglesia; no pudiendo yo menos de extrañar que el Sr. Victorica quiera ahora debilitar la fuerza de estas doctrinas y práctica vigente con tan débiles razonamientos.

El Sr. **VERDÚ**: No hablaré de las facultades que las Córtes tengan para resolver sobre los diezmos, ni de la necesidad de hacer en ellos una modificacion ó de extinguirlos absolutamente, porque creo á las Córtes muy penetradas de esta verdad. En mi concepto, la cuestion

de hoy es si se ha de hacer una modificacion en los diezmos, ó si se han de abolir enteramente. Dice la comision (*Leyó*). Yo creo que no debe decirse *se hará*, sino que debe hacerse precisamente, si no ahora, en esta misma legislatura. Esto tranquilizará á la Nacion y la pondrá en estado de hacer sus cálculos, y facilitará datos á la comision de Hacienda para el plan que ha de presentar en la próxima legislatura.

Se dice que se hará esta modificacion para que la agricultura pueda sufrir la contribucion directa; pero es necesario que se le ampare tambien en todos los demás ramos, como es el de bagajes, que es contribucion muy penosa y superior á la que paga todo otro que no es labrador. Y aunque esto no es del dia, sin embargo, tratándose de la contribucion directa, quisiera que la comision lo propusiese á las Córtes para que se resolviese lo más acertado.

Añade la comision en la segunda base (*Leyó*). Yo creo que así no puede aprobarse, porque sería aprobar indirectamente que la dotacion del clero pesase exclusivamente sobre la agricultura, y no sé si efectivamente las Córtes estarán en ese sentido; á lo menos no pueden aprobarlo sin una discusion prolija, porque sería poco conforme á la igualdad de las contribuciones que manda la Constitucion, que gravase sobre una sola clase, y no sobre todas, una contribucion de 200 ó 300 millones.

Se trata de la agricultura, que es la principal columna de nuestro Estado. Las naciones, á lo menos en el principio de su prosperidad, no pueden ser á un tiempo agricultoras, comerciantes é industriales. Es menester dedicarnos á un ramo principalmente, si no queremos ser aprendices de todo y maestros de nada. Nuestro suelo nos convida á la agricultura, y la debemos proteger. Mientras al labrador no se le ponga en estado de que tenga un aliciente para vivir en el campo, y mientras esté expuesta su persona y frutos á la rapiña de los hombres y animales, poco habremos adelantado. Nada más comun en las provincias que ver desertar las gentes del campo á los pueblos, donde viven con menos trabajo y más seguridad. Una verdulera en Madrid con 100 rs. vive mejor que un labrador en el campo con 100.000; y mientras no haya alicientes para que el labrador pueda vivir en el campo, ó le prefiera, ó le sea igual á la ciudad, nunca adelantará la agricultura, y sin ella nunca habrá riqueza. Por todas estas consideraciones soy de dictámen que no puede aprobarse esta segunda base en los términos que está extendida; que debe tratarse en esta legislatura de si ha de haber modificacion ó abolicion de diezmos, y si la sustentacion del clero ha de pesar únicamente sobre la clase agricultora. En cuanto á lo primero, yo sería de opinion que se aboliesen totalmente; y en cuanto á lo segundo, creo no deben aprobarse las últimas expresiones de la base, porque da á entender que la sustentacion del clero ha de pesar solamente sobre la clase agricultora, cosa contraria á la igualdad que prescriben la justicia y la Constitucion.

El Sr. Conde de **TORENO**: No hablaré de la necesidad de hacer una modificacion en los diezmos, ni de la autoridad que tienen las Córtes para ello, verdad que han demostrado eclesiástica y políticamente varios señores Diputados. No me detendré, pues, sobre este punto: el Congreso es demasiado ilustrado para necesitar mayor discusion.

Ha dicho el señor que me ha precedido, que se debia tratar de la abolicion total de los diezmos, y que la expresion de «dotar competentemente al clero» envolvía la

idea de que debia ser pagada esta carga por solo la clase de labradores. En esto se ha equivocado. Respecto á la abolicion, no seria prudente decretarla desde luego, porque antes debe saberse qué cantidad es precisa para dotar al clero, y porque hay muchos partícipes á quienes conviene reintegrar. Por esto la comision ha propuesto solo que se haga una modificacion; sin que esto obste á que cualquiera Diputado proponga lo que le parezca, porque la modificacion puede tener mayor ó menor latitud, segun se crea conveniente. De todos modos, la comision no juzga prudente la total abolicion. En cuanto á que las palabras «competente dotacion» indican que la sustentacion del clero ha de pesar solo sobre la clase agricultora, es una equivocacion. Estas expresiones se han puesto para denotar que cualquiera que sea la modificacion que se haga en los diezmos, siempre se ha de dotar competentemente al clero.»

Concluido este discurso, salió la diputacion encargada de felicitar á S. M.

Continuando despues la discusion, tomó la palabra y dijo

El Sr. **CEPERO**: Me ha sido sumamente doloroso ver extraviada la cuestion por el excesivo celo de uno de los señores preopinantes. Sea cual se quiera el origen y naturaleza de los diezmos, me parece que las Córtes no están ahora en el caso de entrar en este exámen, y menos en el de tratar de los perjuicios ó conveniencia que pueda traer su abolicion, como algunos de los señores Diputados han supuesto. La cuestion se reduce á examinar las cuatro bases que propone la comision de Hacienda, para que, recayendo sobre ellas la resolucion que el Congreso estime oportuna, pueda formar la misma comision el plan de contribuciones que ha de regir en el año venidero.

Las Córtes han aprobado ya la primera, reducida á que despues de adoptar las contribuciones indirectas que parezcan convenientes, se cubra el déficit por medio de una directa, repartida entre las tres fuentes de la riqueza pública, territorial, industrial y mercantil. En la segunda, que es el objeto de la discusion presente, la comision hace como una especie de pregunta á las Córtes, á saber: si atendiendo á las muchas razones que hay para tener en consideracion á la clase agricultora, se ha de cobrar con alguna modificacion ó moderacion la pesada contribucion de diezmos. Esta es la única cuestion de que debemos ocuparnos; y no sé por qué se le ha dado tanta extension por alguno de los señores preopinantes. ¿Qué tiene que ver con esto la cita que se ha hecho del Deuteronomio ni del Levítico, ni á qué haber mirado la cuestion teológicamente? Por muy buenas que sean las razones alegadas, á mí me parecen imperitinentes y fuera de su lugar.

El mismo Sr. Lobato, que fué quien promovió esta cuestion, ha dicho que el Estado percibe de los diezmos más de un 70 por 100, esto es, tres cuartas partes de su totalidad. Pues, Señor, en el supuesto que el Estado percibe estas tres cuartas partes; en el supuesto de que esta percepcion está fundada en Bulas pontificias y concesiones apostólicas que el Sr. Lobato debe respetar y que ha citado anoche, ¿qué inconveniente hay en que de estas tres cuartas partes que son del Estado, el Esta-

do haga la modificacion que tenga por conveniente? ¿Podrá negársele al Sr. Lobato el derecho que tiene de ceder en favor de los pobres la parte de diezmos que corresponda á su deanato? ¿Podria decirse por esto que se perjudicaba su derecho? Claro es que no: S. S. podria hacer lo que tuviese por conveniente. Del mismo modo la Nacion tiene facultad de disponer de las tres cuartas partes que le pertenecen, sin necesidad de recurrir á nuevas Bulas pontificias ni de alegar el derecho divino ni humano. Por nada de cuanto se ha dicho se podrán negar á la Nacion el indisputable derecho que tiene de hacer la modificacion que tenga por conveniente sobre lo que es suyo. Si todos los perceptores y partícipes de diezmos no perciben sino una cuarta parte, la Nacion, que percibe tres, puede hacer lo que le parezca, y reducirlas hasta donde quiera, sin que por esto se diga que se roza de modo alguno con la autoridad divina ni eclesiástica; y tengan los diezmos el origen que se quiera, ¿no tienen las Córtes la facultad de aumentar ó disminuir las contribuciones? Pues si tienen este derecho, ellas tienen tambien el arbitrio de rebajar ese diezmo á un trigésimo ó un cuadragésimo sin necesidad de examinar el catálogo de Concilios que se han citado anoche; porque digan lo que quieran, en no metiéndonos con la cuarta parte del diezmo, que es la perteneciente al clero, segun nos ha asegurado el mismo Sr. Lobato, para disponer de las otras tres de que la Nacion está posesionada, nada de lo dicho puede ser inconveniente.

La cuestion del día es enteramente económica y nada tiene de eclesiástica. Si las Córtes juzgan que conviene aliviar á los labradores dejando á favor de esta clase lo que el Estado percibe de los diezmos, cargando á otra lo necesario para cubrir el déficit, ¿á qué hablar de cánones, ni Concilios, ni de abolicion de diezmos? Parece que el génio del mal es quien envuelve a las Córtes en semejantes cuestiones, para que se aprovechen los enemigos del bien; porque hasta aquí no ha habido necesidad de hacer mérito de si los diezmos son ó no de derecho divino. Resérvense, pues, estas cuestiones para cuando sea necesario desenvolverlas, y entonces estará bien que nos diga el Sr. Lobato lo que el santo Concilio de Trento previene acerca de diezmos.

Concluyo, Señor, con decir que la base que la comision propone está tan dentro de las facultades del Congreso, que en mi sentir tiene algo de redundante en la parte en que dice «que se procurará dotar competentemente al clero;» porque yo no entiendo que la modificacion que se haga podrá subir más de la mitad ó de las tres cuartas partes; y no pudiendo exceder de esto, el clero quedará con todo lo que tiene, que segun el Sr. Lobato es menos de la cuarta parte. Como la declaracion que va á hacer el Congreso no va á producir ningun decreto, sino que solo se reduce á fijar un dato para que se tenga presente en la próxima legislatura al formar el plan de Hacienda, la cuestion del día por esta razon sola seria anticipada, y creo que la pregunta de la comision no da márgen á que se mire la cuestion bajo el aspecto teológico-canónico con que se ha mirado hasta ahora.»

Declarado el punto suficientemente discutido, se procedió á la votacion, y se aprobó la segunda base propuesta por la comision. (*Véase la sesion extraordinaria de la noche del 13 del actual.*)

Tomo á continuacion la palabra, y dijo

El Sr. **SAN MIGUEL**: Las Córtes acaban de aprobar que se haga una modificacion en los diezmos, para que la comision de Hacienda pueda establecer la contribucion directa que deberá pagarse el año siguiente. En

consecuencia de los mismos principios que han animado á los Sres. Diputados, y que se han manifestado claramente y con bastante energía, me parece que se debe auxiliar á la comision; para lo cual presento las indicaciones siguientes:

1.^a Que la dotacion del culto y de los ministros eclesiásticos se fije sobre los diezmos exclusivamente.

2.^a Que no se exija más parte de diezmo que la necesaria para la dotacion del culto y de los ministros eclesiásticos, reduciéndose por lo mismo esta prestacion á la 15.^a, 20.^a, 30.^a, ó á lo que se considere preciso á cubrir dicha obligacion.

3.^a Que dotados competentemente el clero y los gastos del culto público con esta contribucion, se separen á beneficio de la Nacion todos los prédios rústicos y urbanos que poseen las iglesias catedrales, colegiatas y parroquiales.

4.^a Que con el valor de estas fincas se reintegre á los partícipes seculares que perciben diezmos en el dia y tengan derecho á esta indemnizacion, bajo los principios y reglas que establecieren las Córtes. Las demás quedarán en el concepto de bienes nacionales, para aplicarlas al Crédito público ó á los fines que se juzguen convenientes.

5.^a Que debiendo contribuir á los gastos del culto y dotacion de los ministros del altar todos los españoles en proporcion á sus haberes y facultades, segun los principios constitucionales, y habiendo de gravitar esta pensión exclusivamente sobre la clase agrícola, se le recompense con una rebaja proporcional en la contribucion directa, con respecto á la que deba imponerse á las otras clases, propietaria, industrial y comercial, puesto que la comision de Hacienda propone, y parece muy justo, que la contribucion directa no se cargue en una sola masa, sino dividida por partes en dichas tres clases.

6.^a Que los diezmos se paguen en todas partes de todos los frutos principales del cultivo, y por un método uniforme, reduciéndose á una sola prestacion, sin diferencia de diezmos y primicias, pagadera en una sola silla.

7.^a Que de los diezmos de cada diócesis se haga un solo fondo para satisfacer los gastos y dotaciones de todo el obispado, dirigiéndose esta administracion de la manera que las Córtes determinen, á propuesta de la comision Eclesiástica.

Esta última indicacion convengo en que no tiene una relacion inmediata con el asunto de que se está tratando actualmente; pero las otras me parece que son sumamente necesarias para que la comision, teniéndolas presentes, vea qué es lo que conviene hacer sobre este asunto. No quiero cansar al Congreso en manifestar las razones de justicia que he tenido para extender las indicaciones que acabo de leer, ni tampoco quiero que las Córtes las califiquen inmediatamente, sino que pasen, bien á la comision de Hacienda, bien á las que entienden en el asunto de diezmos, para que hagan de ellas el aprecio que estimen conveniente.

El Sr. **CARRASCO**: Las que acaba de leer el señor San Miguel son proposiciones, y de consiguiente deben considerarse como leidas por primera vez.

El Sr. **SAN MIGUEL**: No tienen el carácter sino de indicaciones, pues son una consecuencia del dictámen presentado por la comision de Hacienda.

El Sr. **MUÑOZ TORRERO**: Si son, como dice el Sr. San Miguel, adiciones al proyecto, están en su lugar y le autoriza para hacerlas la Constitucion.

El Sr. **SAN MIGUEL**: En ese concepto las presento, y por lo mismo retiro la última.»

Admitidas á discusion las seis indicaciones del señor San Miguel, se mandaron pasar á las comisiones reunidas que entienden en el asunto de diezmos.

El Sr. **GOLFIN**: Me parece que el Congreso ha resuelto que habrá alguna modificacion en el pago de diezmos, y en su consecuencia yo hago una adicion para que la comision la tenga presente al tiempo de dar su dictámen, si las Córtes la aprobasen. Desgraciadamente al labrador se le hace tanto más dura la contribucion decimal, cuanto que todas las demás contribuciones pesan casi exclusivamente sobre él. Al labrador se le ajusta hasta por avos de maravedis cuanto tiene, haciéndole pagar con todo rigor, mientras que todas las demás clases del Estado, como, por ejemplo, los comerciantes y artesanos, tienen mil medios de eludir la ley y de ocultar cuál es su verdadera riqueza. En la contribucion decimal, no solamente paga el labrador la décima parte de sus ganancias, sino que vuelve á pagar de lo mismo que ya ha pagado, como es la simiente, además de satisfacer lo que cuesta el trabajo para la siembra y demás, cuyos gastos son tanto mayores cuanto mayor es la cosecha. ¿Qué razon de justicia hay para que la simiente, cuyo diezmo está ya pagado, no se rebaje al tiempo de exigirse aquella contribucion? ¿Por ventura cualquier otro género vuelve á pagar derechos despues de habérsele exigido los correspondientes? Por consiguiente, el contenido de mi adicion me parece el más justo y digno de la atencion de las Córtes, y tan sencillo, que no dudo que se aprobará, mandando las Córtes que pase á la comision para que la tenga presente al dar su dictámen. Mi indicacion es la siguiente:

«Que para el pago de la contribucion decimal, sea cual fuere la modificacion que se haga en ella, sea deducida la simiente que haya sido echada á la tierra por los labradores para obtener la cosecha.»

Esta indicacion pasó á las comisiones que entienden en el asunto de diezmos.

Leida en seguida la tercera base, dijo

El Sr. **OCHOA**: Hablando de esta tercera base, me parece que el método de patentes ha de presentar grande dificultad en su aplicacion. Por más escalas que quieran hacerse, es el Gobierno regularmente quien deberá hacerlas, y veo que seria muy grande el embarazo que habria para la exaccion de esta contribucion. Se dirá, por ejemplo: los ebanistas han de sacar una patente de 40 rs. En primer lugar, el Gobierno no podrá calcular lo que este ramo podrá dar de sí. Lo que se dice de éste, se dice de todos los demás ramos, tal como de los comerciantes de paños, de las tiendas, cafés, botillerías y todos los demás. El Gobierno no podrá juzgar ni tendrá una noticia cierta de lo que debe producir este proyecto de patentes, y de consiguiente no podrá calcular el déficit que debe haber en la contribucion directa, y que ha de cargar sobre todos en general. Yo no sé tampoco que esta distribucion de contribuciones, que se ha de hacer sobre cada una de las clases de que se compone la sociedad, tenga aquella igualdad proporcional que dice la Constitucion.

Se dice, por ejemplo, empezando por los ebanistas, los de primera, segunda y tercera clase. Yo no sé si será escala respecto de cada una de las clases lo que la comision propone, ó si solamente habrá una patente para cada clase; porque entonces, ¿qué proporcion podrá hallarse entre un ebanista de Madrid y uno de una capital de provincia, que apenas gana lo suficiente para comer? Si se dice habrá una patente para los cafés, ¿qué

diferencia habrá aun en Madrid mismo, entre unos cafés y otros? Por último, siempre vendremos á parar en que unos pagarán poco y otros mucho.

Esta es además una contribucion que he visto establecida en España en tiempo del Gobierno intruso, y ví tambien que el resultado fué que nadie contribuía. Espinosa, mandando el Rey intruso, estableció este derecho de patentes, y el resultado fué que en la córte se pagó con exactitud, y en los pueblos nadie pagó: y aquel Gobierno, sin embargo de que se hacia obedecer por el miedo de las bayonetas, se vió precisado á no continuar exigiendo semejante derecho.

A mí me parece que seria más conveniente que la comision no tratase de establecer este derecho de patentes, sino que dejase la contribucion directa en general. Señalando á Madrid, por ejemplo, 2, 3 ó 4 millones que puedan tocarle, el ayuntamiento, tomando conocimiento de la posibilidad de cada vecino, haria la distribucion segun las tres clases que se han establecido: territorial, industrial y comercial. En las oficinas de este ayuntamiento es donde se hará el cálculo de lo que puede ganar un abogado; qué es lo que gana la Fontana de Oro; qué el café de Lorencini, y á cada uno le señalará más ó menos cantidad, conforme lo que calcule debe corresponderle. En un pueblo hay dos herreros; á uno se le exigen 100 rs., y á otro que no tiene tantos parroquianos se le cargan solo 50, porque sus circunstancias no son las mismas. Mas con el derecho de patentes no me parece que es posible que se establezca esa igualdad proporcional de contribuciones; á lo menos, yo lo creo así: acaso los señores de la comision verán la cosa de otro modo. Pero segun lo que yo observé en la época citada, hubo más desigualdad y más quejas por este derecho de patentes que las ha habido por la contribucion directa. En ésta podrá suceder que el Gobierno, por no tener datos ciertos al hacer la reparticion, imponga á una provincia uno ó dos millones más de lo que puede pagar; pero si la Diputacion provincial está animada de buenos sentimientos, puede tomar noticias circunstanciadas de la riqueza de cada pueblo, y corregir en parte este mal en el repartimiento que haga á cada uno de los pueblos; y si á éstos los anima el buen celo que debemos suponer, no puede haber una diferencia notable entre unos vecinos y otros, porque en los pueblos se sabe si hay un abogado, si éste gana 15 ó 20.000 rs., siendo esto muy fácil de conocer por lo que gasta en su casa, en la mesa, etc.: si hay un herrero, se sabe las rejas que aguza y los hazadones que hace, y así de los demás; de modo que en la contribucion directa, habiendo buena intencion en los ayuntamientos, no puede haber la injusticia de 100 rs. entre los vecinos.

En cuanto á las patentes, como van ya señaladas por el Gobierno, y como éste no puede extender sus miras á toda la Nacion, creo que es imposible conseguir el objeto de que se establezca esta contribucion de modo que todos contribuyan con la igualdad proporcional que requiere la Constitucion.

El Sr. Conde de **TORENO**: El señor preopinante ha hecho algunas reflexiones no muy exactas, sin duda porque no se ha detenido á considerar el modo como se debe imponer este derecho de patentes. Ignoro el método con que se quiso establecer en tiempo del Gobierno intruso, aunque no me parece nada extraño que no lograrse ponerlo en planta, principalmente en los pueblos en donde no podian permanecer mucho tiempo sus agentes sin ser incomodados por las tropas nacionales. La contribucion de patentes es una de aquellas que ne-

cesitan mucho tiempo para plantearse con exactitud y justicia. La dificultad que hay en cargar la contribucion verdadera á las clases comercial é industrial, consiste en la imposibilidad que hay de averiguar cuáles son sus respectivas ganancias. Para conseguirlo seria necesario entrar á escudriñar los manejos interiores del comercio, cosa perjudicialísima y casi imposible de ejecutarse, prescindiendo de sus incalculables inconvenientes.

En Inglaterra este derecho de patentes se suele imponer formando una razon compuesta é imponiendo un derecho fijo y proporcionado á cada clase, y otro en razon del alquiler que paga cada uno por la casa en que habita, tiendas y almacenes. La diferencia que puede haber entre el que gana mucho y el que gana poco, se compensa con la diferencia que hay en los alquileres de las habitaciones que ocupa cada uno: porque el que gana mucho, claro está que vivirá con más anchura que el que gana poco. Lo mismo sucederá en los pueblos de las provincias, donde los alquileres son inferiores á los de las capitales.

Por lo demás, los abogados, por ejemplo, tambien deberán pagar un derecho fijo y otro proporcional: y si sucediese que alguno pagase mucho, tampoco seria una desgracia, porque aunque es una clase útil en la sociedad, no es de aquellas más precisas y productoras. Por consiguiente, el señor preopinante puede tranquilizarse, considerando que este derecho de patentes se debe imponer: primero, por un derecho fijo á cada clase; y segundo, por otro proporcionado á los alquileres. Además, la comision se reserva para cuando presente sus trabajos, exponer otras razones, y se propone hacer cuanto esté de su parte para combinar la igualdad que debe haber entre todas las clases, ó á lo menos la posible aproximacion.

Por uno de los Sres. Diputados se me hace la observacion de que alguna vez sucede que pintores ú otros artistas habiten en boardillas, pagando un alquiler muy bajo. Esto regularmente suele acontecer cuando empiezan á ejercer su profesion; y aunque yo creo que algunos artistas deben ser excluidos del pago de esta contribucion, la comision tendrá á la vista estas y otras observaciones para cuando presente á las Córtes su dictámen.)

Declarado el punto suficientemente discutido, se procedió á la votacion, y la tercera base fué aprobada.

Reducida la cuarta base al nombramiento de una comision para formar el plan de Hacienda, se aprobó la base (*Véase la sesion extraordinaria de la noche del 13 del actual*); y á propuesta del Sr. Conde de Toreno, que dicha comision se nombraria en la forma ordinaria.

Presentó en seguida el Sr. Romero Alpuente una adicion á la segunda base, concebida en estos términos: «A las palabras «se hará una modificacion en los diezmos,» se añadirán estas: «y en los llamados derechos de estola y pié de altar, mientras se examina y resuelve la abolicion de todo.»

Para apoyarla, dijo

El Sr. **ROMERO ALPUENTE**: Los derechos de estola y pié de altar que se cobran en el dia son exorbitantísimos, y por ellos, al que no paga diezmos porque no tiene de qué, le sacan el dinero de otra manera. ¿Por qué, pues, tratándose de disminuir ó de modificar los diezmos, no se han de modificar tambien los derechos parroquiales, que son tan excesivos? Una vez que en obsequio de la clase agricultora va á hacerse ahora una rebaja en los diezmos, que en mi sentir deberá ser luego una entera abolicion, justo es que á la clase que

no tiene de qué pagarlos se le haga en los derechos de estola y pié de altar otra rebaja semejante.

Los pueblos esperan la total abolicion de los diezmos, y se llevarán gran chasco si nos contentamos con una modificacion.»

Aquí suspendió el Sr. Diputado su discurso para dar lugar á que la diputacion que habia ido á cumplimentar al Rey por su cumpleaños, manifestase por medio de su presidente, el Sr. *Giraldó*, haber cumplido con su encargo, y que S. M. la habia recibido con su bondad característica: á lo que contestó el Sr. *Presidente* que las Córtes lo oian con particular satisfaccion.

Continuando la discusion, dijo

El Sr. **ROMERO ALPUENTE**: Mi adiccion lleva el objeto de dar una satisfaccion á los pueblos y de aumentarles la esperanza que han llegado á concebir de que se abolirán del todo los diezmos. Así que me parece debe admitirse, porque no siguiéndose de ello ningun mal, cualquier género de bien que se consiga, esto se adelanta.

El Sr. **SAN MIGUEL**: Me parece que la adiccion del señor preopinante es ajena del asunto de que se trata. De lo que ahora se está ocupando el Congreso es de aprobar ciertas bases, bajo las cuales la comision de Hacienda deberá presentar en la legislatura próxima su dictámen. Por consiguiente, lo que ha dicho el Sr. Romero Alpuente me parece que no tiene su lugar aquí, y sí lo tendrá cuando se trate del arreglo de las rentas y dotacion del clero, en que está entendiendo la comision Eclesiástica, cuyos trabajos van á presentarse al Congreso. La sabiduría y celo de los individuos que la componen tomará en consideracion lo que propone el señor Romero Alpuente, por lo que me parece que no es asunto de ahora, y que deberá esperarse á que dicha comision presente su dictámen sobre el particular.»

Procedióse á la votacion, y la indicacion del Sr. Romero Alpuente no fué aprobada.

El Sr. **OLIVER**: Una de las indicaciones que hice sobre este mismo asunto el día 4 de Octubre, ya pasó á la comision, la cual espero que la tendrá presente y hará de ella el mérito que crea conveniente. Pero ahora no trato de hablar de esto, sino de llamar la atencion del Congreso sobre lo que creo que ninguno de los Sres. Diputados ha tenido presente; es decir, que nosotros hemos habilitado al Crédito público para la venta de las fincas que están en su poder; y como entre ellas hay varias que están afectas al pago de diezmos, entre los bienes que pueden venderse en el intermedio de una legislatura á otra es posible que haya alguna de estas. Por esto, acaso sería bueno que el Congreso tomara una resolucion sobre el modo con que deben quedar gravadas tales fincas para el pago de diezmos, en el caso de que no se haga sino una modificacion en esta contribucion. Digo esto, porque, si fuese posible, antes de concluir la legislatura se diera una resolucion formal por el Congreso que removiese los inconvenientes que pudiera haber.

El Sr. **MOSCOSO**: Yo creo que semejantes bienes no deben tener excepcion alguna, ni debe tomarse con respecto á ellos otra resolucion que la que se tome con respecto á los demás que quedan en calidad de nacionales.»

Ningun resultado tuvo la propuesta del Sr. Oliver; y el Sr. Florez Estrada hizo en seguida una indicacion, reducida «á que la comision de Hacienda propusiese un plan para la formacion de la estadística.»

Habiendo algunos Sres. Diputados indicado que correspondia al Gobierno, se opuso diciendo

El Sr. **FLOREZ ESTRADA**: No, Señor: no satisface mis deseos el que se pase al Gobierno. Creo que es asunto de las Córtes, porque en mi concepto es imposible que el Gobierno haga semejante estadística con la exactitud que se requiere. Los motivos que tengo para oponerme á que la haga el Gobierno son: en primer lugar, que es bien sabida la desconfianza que los pueblos tienen siempre del Gobierno, porque saben que sobre la estadística han de recaer las contribuciones; y en segundo lugar, porque no teniendo una comision que rectifique esos trabajos en todas las provincias, no tendrán de modo alguno la perfeccion que debe apetecerse, pues sobre la estadística han de recaer las contribuciones, y en proporcion á la riqueza que presenten las provincias, en esa misma razon han de ser cargadas, y todos conocen el interés que tienen estas en ocultarla. Por esta razon, yo convengo en que la comision, vistas las dificultades que se ofrezcan para esto, presente un plan, aun cuando éste vaya luego al Gobierno.»

La indicacion del Sr. Florez Estrada pasó á la comision de Hacienda.

Hizo á continuacion el Sr. Solano las siguientes:

«Conociendo cuán difícil es averiguar la riqueza territorial, industrial y comercial, y que los resultados de cuantos medios se escogiten para ello siempre proporcionarán unos inciertos y desproporcionados por la prevencion de los pueblos, mientras estos no se presten de buena fé á proporcionarla, facilitando con exactitud y verdad los datos precisos para formarla con una proporcion aproximada, que es lo sumo á que puede arribarse; habiéndome adherido al dictámen de la comision en el primer artículo que se aprobó anoche, creo conveniente poner en consideracion de las Córtes las observaciones siguientes:

Supuesta la dificultad de averiguar con una proporcion aproximada aquellas riquezas, y que esto pide tiempo, convendrá buscar un medio supletorio que sea el más proporcional para el reparto de la contribucion directa mientras se averiguan las indicadas riquezas, y que facilite el conocimiento de estas para el reparto de la contribucion, y sirva al Congreso y al Gobierno para tantos otros fines.

Para que el vecino contribuyente sepa la contribucion directa que debe pagar, se han de hacer tres repartos: el primero entre las provincias, el segundo entre los pueblos de cada provincia, y el tercero entre los vecinos contribuyentes de cada pueblo.

En estos repartos, hasta que se haga la averiguacion de las expresadas riquezas, caben distintas bases que llenen el reparto proporcional que se desea en cada uno. Una debe ser la base en el primer caso y en el segundo, y diversa puede ser en el tercero, si en este y en aquellos se consigue la insinuada proporcion en que consiste este difícil enigma.

En la poblacion encuentro yo la base más proporcional para el reparto de la contribucion en el primero y segundo reparto. Ella es el resultado de la subsistencia que ofrecen los pueblos á sus habitantes, y que se aumentan ó disminuyen en proporcion que se aumenta ó disminuye la subsistencia; resultando estar conocida la riqueza por la poblacion, que, en mi modo de pensar,

es la base más proporcional para estos dos repartos. Y deberán ser la base en el tercero las utilidades de cada contribuyente en los tres ramos territoriales, industriales y comerciales, ó el valor de sus capitales en los mismos, medio más expedito que facilita la formación de los catastros. La población es de fácil, exacta y pronta averiguación por las matrículas de los curas ú otros muchos medios; y la averiguación de las utilidades líquidas de los contribuyentes de cada pueblo, ó la de sus capitales, en las tres clases de bienes territoriales, industriales y comerciales, déjese á cargo de cada pueblo, dándoles las instrucciones correspondientes para uniformar los resultados, y que puedan sus trabajos facilitar al Congreso y al Gobierno con el tiempo intermedio que les haga olvidar la prevención y desconfianza en que viven en el día, su verdadera riqueza territorial, industrial y comercial, medio único para conseguirlo; así como lo es hasta tanto el supletorio é interino que llevo indicado, para repartir la contribución directa entre las provincias, entre los pueblos de cada una y los contribuyentes de cada pueblo. Y para en el caso que á la comisión ó al Congreso pareciese adoptable este pensamiento, hago la adición siguiente:

«1.º Mientras no se forme una estadística que fije la riqueza territorial, industrial y comercial de un modo proporcional y aproximado, se repartirá la contribución directa entre las provincias, con proporción á su población.

2.º La contribución que por el anterior reparto quepa á cada provincia se repartirá entre los pueblos de cada una con proporción á su vecindario.

3.º La contribución que por los anteriores repartos cupiese á cada pueblo en su provincia, se repartirá entre sus contribuyentes por las utilidades líquidas que resulten á cada uno de los bienes territoriales, industriales y comerciales que posea, ó de los capitales de los mismos bienes territoriales, industriales y comerciales, fijando el Gobierno las reglas para uniformar los repartos, y para convencerse cada vecino de la legitimidad de la contribución que se le haya repartido y de la que se reparta á los demás, y pueda hacer sus reclamaciones.»

Estas indicaciones no se admitieron á discusión, habiendo observado el Sr. Conde de *Toreno* que si se tomasen en consideración, se obligaba al Congreso á conformarse con ellas. Con este motivo manifestó el Sr. *Ezpeleta* que acababa de presentar á uno de los Sres. Secretarios un dictámen de la comisión de División del territorio español, que precisamente hablaba sobre el particular; es decir, que se devolviesen al Gobierno los

trabajos presentados por D. Francisco Dalman sobre la estadística del reino de Granada, insinuando al mismo Gobierno que así este digno sugeto como los demás que estuviesen en estado de encargarse de esta clase de trabajos, siguiesen en ellos, tanto con respecto á aquella provincia, como á las demás.

Se dió cuenta de un oficio del primer alcalde constitucional de Madrid, D. Félix Ovalle, el cual hacía presente que teniendo resuelto el ayuntamiento que el domingo próximo 15 del corriente se verificase la bendición de banderas del regimiento de Milicias Nacionales voluntarios de esta plaza, en la iglesia de Nuestra Señora de Atocha; y deseando, así el ayuntamiento como dicho regimiento, tener la satisfacción de pasar, concluido dicho acto, por delante del salón del Congreso, pedia que las Córtes se dignasen dar su permiso y la orden á la guardia para que no impidiese el paso. Este oficio se mandó pasar á la comisión de Milicias Nacionales.

Dióse cuenta en seguida de una exposición en que el jefe político superior de esta provincia trasladaba el oficio del ayuntamiento sobre la duda que ofrecía el depósito de banderas de la Milicia Nacional, y daba cuenta de lo que había dispuesto para dirimirla, previniendo se suspendiese entre tanto la bendición de aquellas; y como esta debía ejecutarse al día inmediato, el Secretario del Despacho de la Gobernación de la Península remitía dicha exposición á las Córtes para la resolución que estimasen conveniente.

Habiendo indicado el Sr. *Ezpeleta* que el día siguiente la comisión presentaría su dictámen, se acordó, á propuesta del Sr. *Palarea*, que las expresadas banderas se depositasen en las salas del ayuntamiento hasta que se resolviese otra cosa.

Leyóse por segunda vez el proyecto de ley de responsabilidad contra los infractores de la ley fundamental de la Monarquía.

Se levantó la sesión.

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 1820.

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion extraordinaria de ayer.

Se leyó el dictámen de la comision especial encargada de presentar un proyecto de ley para la organizacion de las sociedades patrióticas (*Véase la sesion del dia 16 de Setiembre último*); y habiéndose señalado la de esta noche para su discusion, tomó la palabra y dijo

El Sr. **MORENO GUERRA**: Deseo saber si el dictámen de la comision está fundado sobre estas precisas palabras con que presentó su indicacion el Sr. Alvarez Guerra. (*Leyó la indicacion, y el Sr. Alvarez Guerra contestó que no habia más.*) Pues, Señor, si no hay más, hablaré sobre la totalidad del proyecto, debiendo decir que la comision se ha excedido de lo que le mandó el Congreso, porque la proposicion se hizo con el objeto de formar un proyecto de ley que asegurase á los ciudadanos la facultad de instruirse sobre materias políticas, evitando los abusos. Para proponer este decreto fué para lo que se autorizó á la comision, y no para presentar un decreto de ruina, de destruccion y de exterminio.

El art. 1.º le creo inútil; porque decir que todos los españoles tienen licencia para hablar sobre materias políticas, me parece que no se necesitaba que la comision nos lo hubiera manifestado. Antes que la soberanía residiese *esencialmente* en la Nacion, los españoles tenían este derecho, y nadie se lo habia negado. Dice el artículo 2.º (*Leyó*): *cesarán* dice: véase si esto está conforme con la proposicion y con la orden que dió el Congreso sobre su contenido. «Cesarán desde luego con arreglo á las leyes estas corporaciones *por no necesarias.*»

Jamás se ha visto en una sociedad de hombres civilizados que las leyes prohiban las cosas *por no necesarias*. Si se nos hubiera de prohibir todo lo *no necesario*, no se nos debia permitir comer sino media libra de pan negro, ni beber más que un cuartillo de agua sucia: todo lo que pase de esto, es innecesario. (*Fué interrumpido el orador llamándole al orden por varios Sres. Diputados, y continuó*): Yo hablo en regla y con la libertad de un representante del pueblo español. Es, repito, una cosa extraordinaria y ridícula prohibir tal ó tal cosa *por no necesaria*. Dice luego (*Leyó*). ¿Quién ha dicho á la comision que han dejado ya de ser *convenientes* las sociedades? Yo no sé que el Congreso la haya caracterizado con un don profético, ni que ella deba tenerse por tal; porque esta es una verdadera profecía, y no sabemos lo que podrá suceder mañana. Pero ¿podrán degenerar, podrán ser perjudiciales, como lo fueron los *clubs* primitivos de Francia, que habiendo principiado bien, degeneraron en los de los jacobinos? ¿Y acaso porque yo pueda mirar mal se me han de sacar los ojos? ¿Qué males han causado estas sociedades? ¿Se ha visto acaso algun escándalo en ellas? Si le hubo, fué en el teatro; y por eso ¿le ha ocurrido á nadie decir que se cierren los teatros, ni de esta córte ni de las demás ciudades de España? Yo espero que el Sr. Alvarez Guerra, como autor de la proposicion, me ilustre, porque no comprendo qué males son

los que ha habido en estas sociedades, ni los he visto ni oido. Hay libertad de imprenta, y creo que este es el mejor remedio para toda clase de abusos. Soy imparcial: ni en Cádiz, ni en Sevilla, ni aquí he concurrido á ninguna sociedad. Pero ¿qué han hecho estas? Vamos por partes.

En la ciudad de San Fernando tuvieron origen estas sociedades, y principiaron sus trabajos por reunir al pueblo con el ejército libertador, para que llevase con paciencia la pesada carga de los alojamientos de los oficiales y aun de las tropas, los suministros, los pedidos y contribuciones, y todos los males que tenia que sufrir la pobre Isla de Leon acabada de salir de una peste desoladora y rabiosa, que habia empobrecido y reducido á la indigencia á su vecindario. Despues del desgraciado 10 de Marzo en Cádiz, muertas las víctimas, las sociedades de Cádiz no sirvieron más que para ayudar á los heridos y socorrerlos, y para enjugar las lágrimas y consolar á las viudas y huérfanos.

Vamos á Málaga, que fué otra de las primeras sociedades que se instituyeron. En el Congreso hay un Diputado que se presentó, ó más bien lo presentaron en ella, el cual elogió á sus individuos como debia, y les dijo que eran *los batidores de la ley*; expresion elocuente y digna del Sr. Martinez de la Rosa, que fué quien la dijo. Ellos han sido *los batidores de la ley*, los que han cooperado al acierto en las buenas elecciones, y los que han hecho lo que está hecho. Pero se dice que no son *convenientes*. Esta profecía deseo que se me aclare, porque, repito, no sé la razon de no ser convenientes, y quisiera que el Sr. Alvarez Guerra me ilustrara sobre el particular. Se dice que estas sociedades reglamentadas por ellas mismas serán un Estado dentro de otro Estado; que tienen presidente, secretarios y demás. Pero, Señor, los hombres uno á uno, ó 100 á 100, ¿no pueden reunirse? En un baile de candil, ¿no se nombra un bastonero para que haya cierto orden? ¿Qué es esto? Aquí hay algo, y no puedo menos de escandalizarme. Yo soy el más enemigo de la desorganizacion, y quisiera que se me explicase qué hay ó qué han hecho estas reuniones. El nombre de sociedades patrióticas ¿será el que nos asombre? Lo que es sociedades, siempre las ha habido en España: consultemos la historia, y ella nos hará conocer esta verdad. Es bien sabido que las Juntas fueron las que resistieron en la guerra de la Independencia el inmenso poder de Napoleon, por lo que tengo una aficion particular al nombre de Juntas, las cuales aparecen luego en cualquiera país que se pone en revolucion; y así, el nombre de Juntas no debe asombrarnos.

Yo creia que jurada la Constitucion callaban las demás leyes *políticas*, aunque existan aún las antiguas civiles y criminales, porque desgraciadamente no tenemos Códigos, lo que es un gravísimo mal, pues estamos en una verdadera confusion. El mismo Sr. Martinez de la Rosa dijo en las Córtes ordinarias que nuestra legislacion era *la lista de los caprichos de un hombre solo*; y es cierto que nadie podrá dar un paso en esta carrera sin el auxilio de las luces repartidas entre todos los ciuda-

danos. Señor, ¿dónde estamos? Está jurada la Constitución, en el año 20 del siglo XIX, en un Congreso popular; y esto no podría presentarse ni en el Divan de Turquía.

Dice el art. 3.º (*Leyó*). Esto es muy malo. Yo, jefe político ó alcalde constitucional un poco espantadizo, diría: ¡hola! lo que no es bueno, es seguramente malo: me hacen responsable, luego hay peligro; y por consiguiente, no quiero permitir estas reuniones. Que se diga *que no se reuna nadie*, y no andarse con estos términos medios, ambiguos, cavilosos y aun cabalísticos.

Que hay presidente y secretario: esto, lejos de ser un mal, es un bien, porque si no, serian cuerpos *acéfalos*. Que se reúnen en sitios públicos: ¿y qué es esto? Que unos instruyen al público de balde, y otros llevan dinero. ¿Qué mal se sigue de que un ciudadano vaya á un café, que tome un vaso de ponche, y despues se suba al pulpito y se ponga á perorar? Si no se quiere que lo haga allí, se subirá sobre una mesa; y si esto se le prohíbe, se subirá sobre una silla, y cuando no, se subirá en una viga, como hizo Mahoma para enseñar su ley, y á fé mia que á los treinta años ya su doctrina estaba extendida por la mitad del mundo. Estas son unas cosas que no extrañará el Congreso que las diga, porque cuando se trata del interés de mi Pátria, no puedo callar ni hablar con tranquilidad: si yo supiera dónde se vendía calma, la compraría antes que el pan. Pero ya digo, las Cortes van á cesar, y no sabemos tampoco si el Gobierno es amigo ó si es enemigo de estas sociedades. Quizá mañana las necesitará este mismo Gobierno, y yo siento que no esté presente ninguno de los Sres. Secretarios del Despacho para que nos instruyese sobre esta materia, porque el Gobierno está rodeado de algunos enemigos, y necesita *de estos batidores de la ley*. Y ¿cómo vamos á hacer ahora una ley, ley de tanta trascendencia, sin que estén presentes los Secretarios del Despacho, cuando en cosas de mucho menos interés se les ha llamado? Yo quisiera que se suspendiese esta discusión hasta que estuvieran aquí, porque el Gobierno nada nos ha dicho acerca del particular, y el Congreso y el pueblo tienen derecho para saber cuál es la opinion del Gobierno. Si éste no quiere que las haya, no es justo que recaiga la odiosidad sobre el Congreso solo, sino que se reparta entre los Sres. Secretarios del Despacho si son asustadizos. He dicho y repito que voy á hablar del proyecto en su totalidad. Hay aquí una proposición que me ha escandalizado, y que la tengo *por una blasfemia política* (*Leyó*): esto lo tengo por una *blasfemia*. El Congreso tiene facultades para hacer todo lo que crea útil y conveniente á la Nación, y aquí se presenta el dictámen coartando estas facultades. Este es un escándalo: esta es una *infamia*, y más en boca de una comision del Congreso; de un Congreso representante de una Nación, en la cual reside la soberanía esencialmente. Es escandaloso é inconcebible, repito, el creer que no tiene facultades para derogar las leyes de Felipe IV ó Felipe V.

Yo la primera vez que oí el dictámen de la comision, me escandalicé. Creí que habiéndose pasado tanto tiempo, lo hubiera recogido, y que el haberle dado en los términos que lo hizo, sería asustadiza por los sucesos del 6 y 7 de Setiembre, y nunca creí que hubiese llegado el caso de discutirse en el Congreso. Este dictámen no solo ataca la libertad de la Constitución da á los españoles, sino que los pone de peor condicion que antes que la hubiera. Yo quisiera que fuesen francos los señores de la comision y que dijeran: *no hay sociedades patrióticas*, sin venirnos con estos medios términos y esa

suspension Con esto que nos hubiera dicho, nos ahoraba de esta discusión. ¿Qué han hecho las sociedades hasta aquí? Y aun cuando hubiesen hecho, ¿en las iglesias no hay escándalos? ¿Y por eso se habian de cerrar las iglesias? ¿Hubiera sido extraño que despues de una revolucion donde habia tanta animosidad y tantos agravios que vengar por los delitos de los últimos seis años, se hubieran reunido y hubieran ido á quemar la casa de algun servil delator ó de algun juez homicida? Así que, la conducta observada hasta el dia, no solo prueba la moderacion y el buen juicio de los españoles, sino en cierto modo *su apatía*. Y ¿queremos aun más apatía y aumentar la fuerza de inercia, y debilitar la energía del pueblo y su valor en las circunstancias en que está la Europa? Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora: yo no veo el horizonte político claro y brillante; veo dos sucesos en que no hemos intervenido nada y que han aumentado nuestra seguridad un 100 por 100: hablo de Nápoles y Portugal. Pero sin estos sucesos ¿qué hubiera sido de nosotros? Si en el mes de Enero no nos pusimos en guerra con toda la Europa, porque nosotros nada queremos más allá de los Pirineos y estamos contentos con solo nuestro territorio, nos hemos puesto en contradicción con sus principios. Más allá del Pirineo, repito, no necesitamos ni queremos nada; pero á pesar de esto, aunque nosotros no fuésemos allá, ellos vendrian acá. El último suceso de Portugal nos cubre la retaguardia. Conozco todo lo que vale, así en política como militarmente, aunque nunca he sido militar. Pero á pesar de esto, ¿no vemos á los generales más famosos que han venido al continente y que han entrado ya casi en campaña? Y ¿á qué vienen estos? ¿Vendrán á prohibir las sociedades patrióticas? Yo creo que sí, porque estas sociedades son enemigas de la tiranía y de todo poder absoluto, que es lo que aman los señores de la santa alianza. A ellas es á quien se deben en gran parte las nuevas instituciones, el restablecimiento del Congreso: ellas son las que han sabido dirigir el espíritu público, designar al pueblo las personas que eran meritorias de representarle, porque el pueblo no tenia los conocimientos necesarios, y sí solo el buen juicio y honradez, que son las calidades que caracterizan al pueblo español, y por las que nos eligieron, y creo que no se han arrepentido; pero á nosotros nos ha sucedido lo que comunmente suele decirse, que hemos cobrado buena fama y nos hemos echado á dormir. Desde el tiempo de Carlos II, nunca hemos tenido menos fuerza armada, así terrestre como marítima, aunque ya he dicho en otra ocasion que hoy no la necesitamos, porque las naciones no dependen de los ejércitos, sino de la energía de los pueblos.

¿Para qué es, Señor, ese reglamento que disuelve las sociedades? ¿Qué escritos sediciosos han salido de ellas? ¿Qué conmociones populares han excitado? Se dice que en la Secretaria hay un papel de una de estas sociedades, en que se atribuye la representacion nacional: Juntas de Censura hay que entiendan en su calificación. Pero por un mal parcial, ¿se ha de destruir un bien efectivo? Antes de treinta dias se cierran estas puertas, y el Gobierno queda entregado á sus enemigos interiores y exteriores. Yo no vengo á meter miedo; pero es menester estar siempre con el ojo avizor: vengo á decir la verdad; y si se quitan las sociedades, y con su extincion se extingue el espíritu público, corren riesgo la libertad y la Constitucion.

Que no representen como corporaciones. Esto á mí no me importaria gran cosa; porque ¿qué peligros puede haber en que venga aquí Juan Fernandez llamándo-

se presidente, y Rodrigo Perez llamándose secretario, si ni uno ni otro tiene que presidir ni que guardar secretos sino de los que voluntariamente se los encargan y se les someten? ¿No es esta una puerilidad? ¿No es una cosa propia de muchachos de la escuela? ¿Hemos de ser tan espantadizos?

Pido, pues, que se declare que no há lugar á votar absolutamente, porque ofende á la dignidad del Congreso entrar en estos pormenores, y porque la comision se ha excedido de lo que se la encargó. Esto no es reglamentar, es destruir. La comision, con dos palabras que hubiera dicho, «ténganse por suspendidas,» habia concluido, sin necesidad de ponerlas bajo la inspeccion de la autoridad local; porque en este caso sucederia que si querian tener reuniones en Madrid ó en Maudes (que yo no sé lo que hay en *Maudes* que siempre se le está citando en este Congreso), el alcalde, con ir él mismo ó enviar un alguacil, podia suspenderlas; pero por temor de un mal que no existe acabar del todo con las reuniones, es lo sumo de la injusticia, es lo sumo de la suspicacia, lo sumo de la tiranía; y lo más que una autoridad la más suspicaz, la más espantadiza y la más iliberal, puede hacer respecto á estas sociedades y reuniones *pacíficas*, es mandar, y esto solo era lo que debia haber propuesto la comision, mandar, repito, que no hubiese sesiones secretas, que todas, todas fuesen públicas, y que *ante diem* avisasen á la autoridad local, designando la hora y el lugar de las sesiones, para que pudiese vigilarlas por sí ó por medio de un alguacil. Todo lo demás es anticonstitucional, y proceder con más despotismo que pudiera procederse en Marruccos.»

Para satisfacer la extrañeza que el Sr. Moreno Guerra habia manifestado por la falta de asistencia de los Secretarios del Despacho á la presente discusion, y con el fin de que esta no se interrumpiese, hizo presente el señor Lopez (D. Marcial) que por la Secretaría se les habia pasado aviso anticipado con indicacion del objeto para que se les llamaba, habiéndose presentado á pocos momentos el de la Gobernacion de la Península. Tomó la palabra el Sr. Alvarez Guerra, manifestando que á pesar de que era imposible adivinar las razones que podrian alegarse en contra de su indicacion y del dictámen de la comision, habia extendido algunas reflexiones con las cuales creia dejar satisfechos los deseos del señor Moreno Guerra; y en seguida leyó uno de los Sres. Secretarios el siguiente discurso del mismo Sr. Alvarez Guerra:

«Las naciones tienen cualidades morales que las distinguen entre sí; y las de los españoles son bien marcadas y bien distintas de las de nuestros vecinos. Porque las asociaciones políticas, conocidas con el nombre de *clubs*, fueron tan funestas á aquel país y á la libertad misma, que se apoyó en ellas al principio, no hemos de inferir que nuestras sociedades patrióticas puedan jamás llenarnos de horror y de luto. Porque los más celosos defensores de la independencia y de la libertad en Francia se convirtieron en tigres feroces, no debemos temer que los hombres más eminentes entre nosotros por sus luces, por su valor, por su heroismo, se extravíen hasta tal punto; y mucho menos que la Nacion los siga en sus extravíos, si por desgracia los tuviesen.

Pasemos la vista por los acontecimientos de esta última época, y nos convenceremos de esta verdad. El que busque opinion entre nosotros, hable y obre segun la suya propia, y no espere extravíar la del pueblo halagándola. El que quiera ser oido con gusto, que no exceda los límites que la sensatez del pueblo español se ha

prescrito á sí mismo en los momentos más críticos; pero si los excediese, esté seguro de que el pueblo lo abandonará y lo dejará solo.

Ninguna cosa demuestra mejor esta verdad, que un ejemplo puesto en las sociedades mismas de que tratamos. Los amigos de la libertad, reunidos en un paraje público en los dias primeros del último trastorno político, vieron con disgusto asociarse ociosos, ofendidos y pretendientes que hicieron degenerar en meras personalidades el interés público que los habia reunido, y en deliberaciones que más parece que tenían por objeto emplear la fuerza física que dirigir la moral. Separáronse de esta reunion muchas personas más sensatas, pero sin haber escarmentado: y atribuyendo á los individuos el defecto de la institucion misma, se reunieron en otros parajes, de donde por igual motivo han tenido que separarse tambien. Esto nace de no haberles ocurrido que las verdaderas sociedades patrióticas reglamentadas y deliberantes, nombradas por sus conciudadanos y autorizadas por la Constitucion, son el Congreso nacional, las Diputaciones provinciales y los ayuntamientos; y que los particulares no tienen por la Constitucion misma otro derecho que el de ilustrarlas por medio de la imprenta ó por sus exposiciones particulares, y el de censurar su conducta juntamente con la del Gobierno, pero sin formar nuevos cuerpos políticos cuyo espíritu puede extravíarse y ser un estorbo á la marcha de los tres poderes del Estado.

Si en cada pueblo se erigiese una sociedad patriótica que deliberase sobre toda clase de negocios, ya en público, ya en secreto; si estas sociedades se correspondiesen y acordasen entre sí para lograr lo que las autoridades reconocidas no creyeren conveniente, ó para estorbar lo que estas autoridades creyesen útil; si apoderasen cada una á un individuo para que en cada capital de provincia formase una sociedad provincial; y si estas sociedades provinciales nombrasen apoderados que formasen en la capital una sociedad general, ¿qué ayuntamiento, qué Diputacion provincial, qué Congreso, qué Gobierno mandaria ni seria obedecido? Tendríamos dos Estados de hecho, que no tardarian en chocar más tiempo del que tardasen en encontrarse en las opiniones, si no es que la sensatez de la Nacion abandonaba en sus extravíos á estas nuevas autoridades. Así creo seguramente que sucederia; pero no por esto seria menor el mal. Personas muy apreciables y que hubieran hecho mucho bien á la causa pública, si circunstancias y situaciones lisonjeras de que no todos saben ni pueden prescindir no las extraviasen, se verian en tal caso expuestas á la animadversion y á la desconfianza pública; y de aquí á ser personas temibles no hay más que un paso.

Yo no veo otro medio de que las reuniones conocidas con el nombre de sociedades patrióticas no sean peligrosas, que el que no tengan reglamento, sino que cada individuo en estas reuniones logre el concepto que merezcan sus luces y su modo de manifestarlas, sin el auxilio moral de un cuerpo colegiado, y más aún todavía, sin el de una federacion entre estos cuerpos. Yo hice la proposicion de una ley que asegure á los ciudadanos la libertad de ilustrarse con discusiones políticas, evitando los abusos; y yo no veo que para ilustrarse con discusiones políticas se necesite ni reglamento, ni presidente, ni secretario, ni acuerdos, ni votaciones. Ni veo tampoco otro medio de evitar abusos, que el desterrar de estas reuniones todas las formalidades, menos la del buen orden. ¿Qué añade á la libertad individual de hablar el ser individuo de una corporacion, sino la fuerza moral

que le da la corporacion misma? ¿Y por qué se han de retraer de hablar al público y de ilustrarlo los que no se propongan influir en la opinion apoyados en las corporaciones? Habrá algunos que se retraerán de asistir á estas reuniones cuando no puedan á la sombra de ellas influir en el Estado. Pero yo no veo en esto un gran mal, mientras que los ciudadanos puedan reunirse libremente en los mismos ó en otros distintos parajes, y discutir y censurar sobre todos los objetos de sus intereses.

Yo no tengo miedo de que las autoridades locales, es decir, los alcaldes de los pueblos, les nieguen caprichosamente ó por fines siniestros la facultad de reunirse; al menos yo no veo qué personas se podrian designar que fuesen más interesadas en conservar esta libertad. Los alcaldes son las personas de más opinion en los pueblos, segun los pueblos mismos lo testifican nombrándolos; y la circunstancia de volver á la clase de meros particulares inmediatamente que cesan en sus funciones, disipa el temor de que pierdan de vista los intereses de la clase á que solo por una temporada muy corta dejan de pertenecer. ¿Es de presumir que un alcalde niegue á sus convecinos, á sus amigos, á sus parientes, la facultad de reunirse sin motivos muy graves? ¿Es de presumir que sin estos motivos suspenda las reuniones que su antecesor habia permitido y que su sucesor volverá á permitir? Porque si los alcaldes de un año y otro suspenden una reunion, es para mí una prueba de que sus individuos abusaban de la facultad de reunirse. La responsabilidad de los alcaldes no puede recaer sino sobre desórdenes anunciados, y que por consiguiente ha debido prevenir. Los alcaldes serán responsables de la conducta de estas reuniones, como lo son de las funciones de toros, de las comedias, de las academias de baile; en una palabra, de los mismos sitios públicos en que se habrán de tener estas reuniones.

He prescindido en mi corto razonamiento de hechos y aplicaciones que le hubieran dado más fuerza, porque en este punto, como en otros muchos, examino las cosas y me desentiendo de las personas. Pudiera haber prescindido tambien de manifestar mi opinion en un asunto que algunos mirarán como poco popular; pero autor de la proposicion que ha motivado esta discusion, é individuo de la comision que la ha examinado, le debia al Congreso, me debia á mí mismo la justicia de esplayarla sin dar motivo á interpretaciones.

En resumen, mi voto es que no solo se permitan, sino que se fomenten y estimulen las reuniones de ciudadanos á discutir negocios políticos, pero sin formar corporaciones; y que todo el mal que puede resultar de esta restriccion, reducido á alejar de ellas á las personas que busquen su apoyo para sus fines particulares, en mi sentir es un bien. Todavía si se quiere proteger más el derecho de reunirse, á la cláusula del art. 3.º que dice «podrán hacerlo con prévio *permiso* de la autoridad local» se podria sustituir la siguiente: «podrán hacerlo con prévio *conocimiento* de la autoridad local.» De este modo el ejercicio del derecho de reunirse no dependeria en ningun caso de la arbitrariedad de los alcaldes.

El Sr. **GARELI**: Como de la comision, procuraré calmar la ansiedad y disipar los escándalos que su dictámen ha causado al señor preopinante, recorriendo, en cuanto alcance mi memoria, sus razones una á una. Empezó por inculpar á la comision de haber excedidose, y traspasado las facultades que le dió el Congreso: acusacion injusta y que se desmiente por sí misma. El texto literal de la proposicion del Sr. Alvarez Guerra dice: «presentar un proyecto de ley que asegure á los ciuda-

danos la libertad de ilustrarse con discusiones políticas, evitando los abusos.» Cotéjense con este encargo los artículos, y provoco el juicio, no solo del Congreso, sino de todo el público, de la Nacion entera, para que se diga en qué consiste el extravío ó abuso de la comision. Pero contrayéndose al tenor literal de los artículos mismos, extrañó S. S. la redundancia del primero, tachándole de inútil y supérfluo. Yo no diré que sea de absoluta necesidad; pero sí recordaré que la comision, al redactarle, siguió la marcha que le habia trazado el Congreso en las leyes reglamentarias, como lo es la presente. Pocos días hace se discutió y aprobó la de la libertad política de la imprenta. Su art. 1.º reprodujo el cánón sentado en el 371 de la Constitucion. Imitando, pues, la comision este ejemplo, no juzgó impertinente inculcar á los españoles el derecho y libertad de hablar de los negocios públicos: libertad que emana del sistema constitucional, pues que bajo de los Gobiernos tiránicos está reputada como un crimen de Estado: libertad que no podria negarse sin atacar el principio fundamental de la imprescriptible soberanía nacional; pero libertad legal, esto es, dictada y reglada por la ley constitutiva del Estado, no dejada al antojo de cada uno. Porque es forzoso repetirlo una y mil veces: nuestra libertad recibe sus justas modificaciones de la ley, empezando por la de los mismos representantes de la Nacion. Por ventura, una vez que se declaró un punto suficientemente discutido, ¿puede hablar ya un Diputado, aunque hubiese pedido la palabra? Y cuando en una votacion fué de parecer distinto, ¿no le está prohibido fundar su voto en contrario? ¿Y por qué? Porque esta libertad de hablar, de opinar y otras cualesquiera libertades son libertades *civiles*, no puramente *naturales* como las de los iroqueses; pero á falta de esta libertad anchurosa, gozamos de una propiedad más garantida que la de los salvajes, la cual no reconoce otro amparo que el secreto de su gruta, y si se descubrió ésta, ya no puede contar el dueño sino con la fuerza de su maza.

Ni se me diga que la libertad civil tiene más ensanches en otros pueblos civilizados. Yo respeto y aprecio los sábios establecimientos do quiera que existan; y aunque la Nacion española puede gloriarse de haber servido de modelo en muchos ramos, jamás me opondré á que se prohija todo lo bueno que venga de afuera. Sé que Atenas tomó una buena parte de sus leyes de los hebreos: que á su vez las tomaron los romanos de los atenienses, y que las de Roma se difundieron por toda la culta Europa; pero no veo una necesidad de aclimatar entre nosotros todo lo que se practica en otras partes, y que se refiere á usos y costumbres propias, muy distintas de las nuestras. La Inglaterra, por ejemplo, que se toma en boca á cada paso para empeñarnos en la imitacion, tiene libertad de cultos, y nosotros no; tiene Cámaras, y nosotros no; tiene un *velo* absoluto, y nosotros no; tiene, para decirlo así, un cierto derecho de suicidio, y nosotros no; tiene sus trompis de algun modo canonizados, y nosotros no. ¿Se pretenderá acaso introducir aquí todas estas novedades? ¿Habremos de arrancar nuestras viñas para entregarnos casi exclusivamente al uso de la cerveza? ¿Cortaremos toda la porcion de olivos con cuyo producto nos alumbramos, para hacerlo con los gases? No son, pues, siempre exactas ni aplicables las comparaciones tomadas del extranjero, ni seria decoroso que nos convirtiéramos en imitadores y pedisecos suyos. La comision, para huir de todo extremo, inculca en su primer artículo la libertad de la palabra sobre materias políticas, «bajo la restriccion y

responsabilidad establecidas ó que se establezcan por las leyes.»

Acerca del segundo, extrañó el Sr. Moreno Guerra la voluntariedad con que la comision asegura *no ser necesarias* las sociedades. Con efecto, lo sentó así la comision, y yo insisto por mi parte en este mismo dictámen, porque *necesario* es en el órden político actual todo cuerpo ó reunion que haya establecido la Constitucion, como las Juntas electorales, las Diputaciones electorales ó permanentes, la reunion del Congreso; pero yo no veo en toda la Constitucion una sola palabra que exprese ó virtualmente autorice las sociedades de que se trata. *Escribir, imprimir y publicar*, ó sea circular por anuncios ó por los voceadores el impreso; tales son los límites que la Constitucion señala á la libertad política del pensamiento. Ni tiene la comision de qué arrepentirse cuando añadió «que han dejado de ser convenientes:» esto no rebaja el mérito que hayan contraido, ni el que podrian contraer en lo sucesivo si el Congreso acordase su continuacion y multiplicacion hasta lo infinito, medida que me seria muy indiferente como hombre particular; pero hablando como Diputado, repito, que á mi entender dejaron de ser convenientes. Fueron por su naturaleza extraordinarias: las legitimó la extraordinaria é inconcebible posicion en que nos vimos por espacio de cuatro meses; y pues ésta desapareció felizmente con la instalacion pacífica de las Córtes, es claro que han dejado de ser convenientes. Así, las guerrillas ó cuerpos francos, los armamentos en masa ó somatenes, conocidamente provechosos durante la invasion enemiga, serian inútiles y aun perjudiciales despues de la paz. Así, cuando se prende fuego á un edificio, llama la vecindad una compañía de zapadores para cortar sus progresos, y les agradece y recompensa sus tareas; pero atajado ya, ¿juzgaria conveniente prorogar allí su alojamiento indefinido, so color de evitar que se reprodujese la desgracia? ¿Qué mayor garantía puede recibir el sistema que la actual reunion del Congreso, y la naturaleza de sus operaciones dirigidas á restablecer el crédito, multiplicar los propietarios, entrar la propiedad en circulacion y atajar todo género de abusos?... Ya oigo se me replicará que el Gobierno, el Gobierno... Pero yo llamo aquí muy particularmente la atencion de las Córtes, pues que á primera vista deslumbra, como muy plausible, la idea de velar sobre el Gobierno. Sin embargo, lo cierto es que nada seria más ominoso que esta especie de tutoría. En vano las Córtes dictarán leyes sábias y justas, si el Gobierno no las ejecuta con energía. Y ¿cómo podrá tenerla, si se ve arredrado á cada paso por interventores que no señaló la ley? La ley le enfrena con la responsabilidad, con la libertad política de la imprenta, con el derecho popular de peticion; pero si se quiere avanzar más, el resultado será quedarnos sin gobierno, ó lo que es lo mismo, entregarle á manos débiles é ineptas; porque ¿cómo le querrá aceptar el hombre de probidad y de vigor, si se ha de ver continuamente expuesto á baldones y descrédito? No, Señor; esto no es posible. Vuelvo á decir que el Gobierno, sin barrenar la Constitucion, no puede reconocer otro freno que el de la Constitucion misma. Y aquel á quien le pareciere feble ó insuficiente, busque enhorabuena otros pueblos y otra ley fundamental; pero no pretenda introducir aquí aquella potestad tribunicia que puede tal vez convenir bajo de bases é instituciones muy diversas de las nuestras.

Un pueblo, por ejemplo, como Roma, que alcanzó la libertad dejando en su seno los elementos aristocráti-

cos, necesitó apelar á este contrapeso, si bien despues de haberse despedazado ambas clases por largo tiempo, sucumbieron entrambas á los dictadores, á los triunviro, á los Césares. Pero; bajo de nuestra Constitucion actual! ¿Quién ha podido leerla sin admirar el hermoso equilibrio de los poderes? ¿Quién podrá echar menos elemento alguno para su estabilidad? No hay razon, pues, para acriminar á la comision por haber dicho que no le parecen ya *convenientes* las sociedades en cuestion. Avanzó más la comision, no ya en sus artículos, sino en el discurso preliminar, diciendo que «ni reconoce facultad en el Congreso para erigirlas de nuevo:» proposicion que calificó el señor preopinante de una especie de blasfemia política. Pero la comision tuvo muy presente la tendencia á que caminaban con rapidez, cuyo desenlace seria erigirse un Estado dentro del Estado mismo. ¿Cómo cabe, pues, en las facultades de unas Córtes ordinarias alterar los elementos de la Constitucion? ¿Ni quién se atreveria siquiera á proponerlo hasta pasados los ocho años, y obteniendo poderes especiales para ello? Cada cual tiene su modo de ver, y mis ojos no descubren esa blasfemia, al paso que se les presenta muy á las claras la incompatibilidad de las sociedades, cual se hallan, con el espíritu de la Constitucion.

Ha sido tambien objeto de escándalo que se citasen las leyes prohibitivas de estas asociaciones; porque si desgraciadamente hemos de pasar por las civiles y criminales que existen hasta la formacion de nuevos Códigos, empero las políticas desaparecieron ya. Convengo con el Sr. Moreno Guerra acerca del principio, y podria enseñarle impresos míos en donde senté la doctrina de que la Constitucion, no solo ha derogado las leyes de Partidas y Recopilacion que hablan de la sucesion á la Corona y de los que se decian derechos mayestáticos, sino tambien cuantas están virtualmente fundadas en el antiguo sistema. La diferencia consiste, pues, en la aplicacion del principio: y la comision, al hacerla, se remontó á las indudables máximas del derecho social, que prohiben dentro de un Estado organizado ya, la existencia de todo otro cuerpo que no tenga el permiso de la autoridad pública. Cito en confirmacion la ley de Enrique IV, que no es una ley ministerial, sino peticion de los Procuradores de los Reinos que nos precedieren en estos asientos. Ellos fueron los que, para restablecer la paz y atajar en su raíz las turbulencias interiores, pidieron la disolucion de ciertas hermandades que «tomaban apellidos santos, y mostraban sus estatutos inocentes, pero que á resulta de sus pláticas secretas habian sido origen de bullicios y levantamientos...» Yo no diré que la comparacion sea exacta: lo que digo es que el principio sancionado por la ley no merece censura alguna. Entremos con imparcialidad en el exámen del artículo 3.º

La comision, empleando el adverbio *periódicamente*, ha dado á la reunion de ciudadanos para las discusiones y reciproca ilustracion un ensanche que no es conocido aun en los países más libres, donde solo se permiten *ad hoc*, para determinado y conocido objeto; y estando además acorde en sustituir la palabra *conocimiento* á la de *permiso*, no sé qué es lo que se desea más. ¿Incomodan por ventura las medidas de precaucion que deberá tomar la autoridad para evitar abusos? Pero tratándose de reuniones que pueden albergar elementos heterogéneos, degenerar de su espíritu primitivo, ó ser extrañadas por el oro extranjero, por los enemigos interiores del sistema, ¿qué hombre amante de su Constitucion y de su Pátria puede llevar á mal la superintendencia de

una autoridad constitucional? La comision la sujeta á la debida responsabilidad, pues que de ella debe depender la conservacion del órden en su distrito; pero seria un absurdo imponerle la responsabilidad, si no se la autorizase con las facultades necesarias para evitar los abusos. Tal es la práctica de aquellos pueblos que caminan dos siglos adelantados en la carrera de la libertad.

El art. 4.º ha parecido necesario á la comision. Para asegurar la libertad de las discusiones políticas y recíproca ilustracion *sin abusos*, es preciso atajar el *espíritu* de corporacion que se contrae con mucha facilidad aun por el más despreocupado, y una vez contraido, le empeña en sostener hasta las preocupaciones y los errores y las injustas pretensiones del cuerpo: espíritu funesto en lo político, en lo literario y aun en lo religioso, cuando fué el producto de creaciones humanas, de otra parte muy plausibles. Nada más comun que el prurito de alistarse en cofradías y hermandades y de asistir á ellas, y contribuir á sus derramas, en tanto que no se acude quizá más de una vez al año á la iglesia parroquial. Los hombres deben ciertamente formar asociacion en lo civil y en lo religioso; pero los deberes sagrados que contraen por estos dos vínculos esenciales se debilitan regularmente en razon de los que contraen por voluntariedad, cuando no están animados de una virtud ó de un patriotismo heróico. Además, ciñéndonos al influjo de las sociedades en cuestion, formando un cuerpo ramificado y concentrado en las de la capital, ¡cuán fácil les seria paralizar la accion del Gobierno! El encargado de la exaccion de los tributos, la autoridad política gubernativa, el que aplica la ley civil y criminalmente, es imposible que agrade á todos: y ¡qué funcionario arrostra la contradiccion de un cuerpo cuyos ecos resueñan de un extremo á otro del Reino, siempre que este cuerpo se empeñe en contrariar sus medidas, en defender á un individuo suyo? Reñanse en buen hora los ciudadanos; pero no autorice el Congreso una federacion que nos exponga á la censura de las generaciones presentes y venideras.

Por lo demás, se dice con mucho énfasis que hay una necesidad imperiosa de difundir la ilustracion entre el pueblo para que marche el sistema. Así es ciertamente; pero no por los medios que han adoptado las sociedades. La ilustracion es un fluido bienhechor, pero que debe distribuirse con suavidad y mesura, no prodigamente y sin preparacion. Esto seria deslumbrar y cegar, no ilustrar. Nuestro entendimiento se parece de algun modo al estómago. Los alimentos intelectuales, aunque sean sanos, se indigestan en las cabezas débiles. Las ideas de libertad en política, de crítica racional en materias eclesiásticas, de principios exactos en asuntos científicos, inoculadas superficialmente en los ánimos de una muchedumbre no preparada, solo sirven para producir hombres díscolos é inobedientes á la legítima autoridad, incrédulos en religion, pedantes insufribles. Además, el estrago de una peroracion indiscreta es incalculable; porque si de una parte hablando los sentidos á los sentidos, es más profunda la impresion, de otra es más difícil citar de responsabilidad al orador, y bajo este punto de vista puede disfrutar una funesta impunidad que no goza el que escribe y publica sus pensamientos... Pero el pueblo bajo carece de instruccion... Seamos imparciales. El proyecto de crear un pueblo de filósofos seria el proyecto de un loco. Y si los pocerros, por ejemplo, de Madrid llegasen á cierto grado de instruccion, abandonarían ciertamente su ocupacion. La Constitucion protege la libertad individual y los dere-

chos de todo español; pero la igualdad de fortunas y de luces seria un delirio. La Constitucion tuvo sin duda muy presentes estas observaciones, cuando se ciñó á establecer como garantía suya la libertad política de la imprenta, sin indicar siquiera la de arengar en plazas y cafés formando cuerpo. Y á la verdad, ¿cómo podria darse existencia política á semejantes asociaciones, sin aventurar uno de los mayores bienes que ha proporcionado el sistema, cual es la unidad de la Nacion, la proscripcion del espíritu de cuerpos ó clases? ¿Cómo podria marchar el Gobierno, las Córtes mismas, cuando acrecentado el poderío de las sociedades, discordase la opinion de éstas de la del Gobierno ó la de las Córtes? No, Señor; el virtuoso ciudadano tiene cuanto há menester para concurrir al sostén de la libertad pública con la libertad de la imprenta. Aspirar á mayor libertad, á la de formar cuerpos concéntricos enlazados entre sí, seria aspirar á una licencia absoluta, ó á la pretension ominosa de que una parte de la Nacion dictase la ley al todo de ella. Así que, la comision insiste en la necesidad de que no se permita á los ciudadanos reunidos para discutir ó ilustrarse recíprocamente, que formen cuerpo, ni tomen la voz del pueblo, ni establezcan vínculos de fraternidad entre sí.

El Sr. FLOREZ ESTRADA: Si la comision accede á las reformas propuestas por el Sr. Alvarez Guerra, á que suscribo, la discusion ofrecerá poco que decir: sin embargo, yo habia formado un escrito que si el Congreso quiere lo leeré. (*Leyó.*)

«Todo obstáculo al descubrimiento de la verdad, á la mayor ilustracion de los pueblos, y á que estos por todos los medios posibles se habitúen á interesarse en la conservacion de sus derechos, por más leyes y autoridades que se citen, no puede menos de ser efecto de vanos temores, de añejos abusos ó de ridículos paralogismos á que continuamente acuden los hombres no conaturalizados con la verdadera libertad. El carácter distintivo de las leyes en sociedades por constituir ó aun no bien constituidas, es la tendencia constante á sofocar las luces y á reprimir la firmeza de los individuos, menoscabando los medios y la eficacia de sus reclamaciones contra las injusticias de los gobernantes. El que se detenga á examinar sin prevencion el cuadro de las calamidades humanas, fácilmente se penetrará de tan triste verdad. Cuando una vez se llega á privar al pueblo de un solo medio de ilustrarse, de reclamar del modo más enérgico contra la opresion de las autoridades, de exponer individual ó colectivamente al Gobierno cuanto crea oportuno á sus intereses y mejor estar, no pasará mucho tiempo antes que se le prive de otro, y luego de otro, hasta que se destruya por entero todo gérmen de libertad. Si el pueblo español desde la época de Carlos I hasta en 1808 hubiese gozado de la facultad de reunirse libremente para discutir sus intereses políticos y económicos, aun cuando no conociese otra institucion de libertad, ¿quién es el hombre de buena fé que suponga hubiera sido sumido en la esclavitud y el embrutecimiento á que le condujo el fanatismo, impidiéndole ilustrarse y reclamar consecuencias indispensables del reunirse?»

El primer paso hácia la esclavitud es atacar la libertad de la prensa é impedir las reuniones libres de los ciudadanos, sin las cuales, desengañémonos, jamás existió ni puede existir sólidamente el imperio de la ley. ¿Y será posible que un Cuerpo legislativo que acaba de ser restablecido por un efecto, en gran parte debido á estas mismas reuniones patrióticas se proponga adoptar su

abolición, que tal sería el resultado del dictámen que se va á discutir? La voluntad general del pueblo debe ser siempre el norte que dirija las resoluciones de sus representantes, y de ningún modo puede expresarse con más acierto esta voluntad que reuniéndose los ciudadanos para manifestarla al Cuerpo representativo por medio de solicitudes que sean el fruto de sus discusiones. Este derecho inherente á todo pueblo libre, además de contribuir á la ilustración, es el acto más principal con que un pueblo demuestra ejercer la soberanía que reside esencialmente en la comunidad. Es el recurso más natural, más poderoso, y tal vez el único para acudir á sus representantes á fin de que reformen y mejoren las leyes establecidas y hagan observar las promulgadas, y sean ellos mismos más justos y reflexivos en sus deliberaciones. Finalmente, la libertad de la palabra, que constituye la de las reuniones, es un derecho más fuerte, más natural y mucho más antiguo que el de escribir, naciendo éste de aquel. Si pues hoy la ley fundamental protege la libertad de la prensa, ¿cómo se osa atacar su origen y principal base? ¿Por qué lógica singular se nos dice hoy que la Constitución implícitamente se opone á la formación de sociedades patrióticas, bajo el fútil pretexto de que no las autoriza? Por igual lógica también deberíamos deducir que ninguno puede legalmente respirar, pues que en ningún artículo de la Constitución se autoriza este acto.

El pueblo debe estar persuadido de que solo á sus representantes pertenece la formación de las leyes; pero debe estarlo igualmente de que así como al Congreso no puede disputársele esta facultad y la suprema inspección en la conducta de todos los funcionarios públicos, sin embargo de las diferentes atribuciones de los otros poderes, así también la Nación, en quien esencialmente reside la soberanía, tiene el derecho de vigilar en sus propios intereses, y con prévia deliberación el de solicitar de sus representantes cuanto considere oportuno y conveniente al bien del Estado. Decir lo contrario, es lo mismo que decir que quien concede sus poderes por un tiempo limitado ó ilimitado á determinadas personas renuncia y se desposee hasta del derecho de conocer cómo sus apoderados desempeñan el encargo que les ha confiado, y el de darles nuevas instrucciones. Los procuradores de una Nación, igualmente que los de un simple particular, no reciben los poderes para hacer su voluntad, sino la del pueblo de quien dimanan, el cual no pudo concedérselos para otro objeto que el de promover su felicidad. Desgraciadamente por experiencia hemos visto que los representantes de una nación son capaces de convertir sus poderes en la destrucción de aquellos mismos objetos para los que les fueron concedidos; y si los ciudadanos quedasen imposibilitados de reunirse, ¿cuáles serían los medios de reparar estos males, y sobre todo, cuáles los medios de precaverlos? La comunidad, dice Locke, el más profundo y moderado de todos los políticos, siempre retiene un poder soberano de salvarse á sí misma de las empresas y proyectos de cualquiera persona ó cuerpo, aunque sea el de sus legisladores, no teniendo ningún hombre ni sociedad de hombres poder para abandonar y entregar su conservación, y por consiguiente, sus medios á la absoluta voluntad de otro.

¿Quién es el que puede desconocer que privar á los ciudadanos de reunirse es privarles del medio más natural y sencillo que tienen para velar en el desempeño de sus apoderados, para comunicarles las instrucciones que tengan por oportuno, para hacerles entender cuál sea su

voluntad, y para contenerlos en sus mismas trincheras? Las reuniones son la principal escuela práctica de los pueblos libres, la más provechosa que se les puede ofrecer, y la única á que pueden asistir y en donde pueden instruirse las clases pobres que no tienen medios para mantener á sus hijos en otras cátedras y universidades, por más que estas abunden. ¿Ha podido creer la comisión que los pobres asisten á las cátedras, para suponer que en ellas se instruyen, ó que estas clases no merecen ser instruidas?

La libertad misma de la imprenta, á pesar de su importancia, no puede proporcionarles las grandes ventajas que se acaban de mencionar. Por consiguiente, privar las reuniones libres es injusto y contrario á todo sistema representativo, fundado en no contrariar en cosa alguna la voluntad expresa ó tácita de la mayoría, ni cuanto sea relativo á mejorar su educación y sus ideas. En el momento en que sean prohibidas las reuniones libres, las Cortes no podrán menos de contrariar la voluntad general, y de perder la fuerza moral, que es el único apoyo que las sostiene. Esta sola consideración, y la de la ingratitud en que incurrirían, deben ser motivos demasiado poderosos para que el dictámen sea desechado. La comisión misma se ve forzada á confesar los grandes méritos y servicios de estas corporaciones; empero esta confesión no es anunciada con aquel lenguaje que lleva consigo toda la franqueza que era de esperar de la sabiduría de sus individuos. Nos dice que «erigidas por el más desinteresado patriotismo para sostener la vacilante opinión pública en los días de mayor crisis, cooperaron á preservar tal vez la Nación de las reacciones más ominosas, calmando la ansiedad de los leales, enfrenando las maquinaciones de los disidentes y templando la vehemencia de los impetuosos.» ¿Por qué el artificio de expresar con duda que cooperaron á preservar tal vez la Nación, y asegurar en seguida sin la menor duda que calmaron la ansiedad de los leales, que enfrenaron las maquinaciones de los disidentes y que templaron la vehemencia de los impetuosos? ¿Podrá jamás semejante lenguaje inspirar á nuestros constituyentes aquella noble confianza que da vida y vigor á todas las resoluciones de un Cuerpo deliberativo? Me abstengo de decidir, y apelo al sentimiento de los hombres de razón.

Sigamos algún tanto más el texto literal del dictámen. «Pero sentado ya magestuosamente el edificio de nuestra libertad civil, y obtenida en 9 de Julio toda la garantía que es dado desear en lo humano, la regeneración política consiguiente al nuevo sistema debió ser obra de los elementos que ha señalado la Constitución misma, sin la concurrencia de otro alguno, por plausible que fuese.» Según esta doctrina, sería un exceso ó cuando menos un error toda reforma hecha por las Cortes y no indicada por la Constitución, y deberíamos calificar como tales la abolición de vínculos, supresión de monjes y otras varias, por no ser obra de los elementos que ha señalado la Constitución.

No me detendré á recordar el uso que hicieron de este derecho otros pueblos de la antigüedad, y actualmente los Estados-Unidos y la Inglaterra, en donde las reuniones se consideran como el principal baluarte de la libertad y el único freno del Parlamento. Me detendré á examinar, aunque muy ligeramente, la consideración que estas corporaciones lograron en España ante la ley. En Castilla, Leon y Galicia hubo asociaciones llamadas hermandades, conocidas en Aragon por el nombre de union. Tales asociaciones, siempre que las

necesidades del Estado lo exigían, eran permanentes, y su objeto era aún mucho más extensivo que en el día, como se echa de ver en las palabras con que las reunidas en Búrgos en 1182 y 1295 anuncian la causa de su reunion. «Veyendo (dicen) los muchos males que habemos recibido fasta aquí de los homes poderosos: la verdad es consumida, la fuerza y el robo se frecuente, et el homicidio se usa, la tiranía et la cobdicia prevalece; et veyendo que todo esto se usa en estos malaventurados regnos, acordamos de facer union y hermandad, para que guardemos todos nuestros buenos fueros, é buenos usos é buenas costumbres.»

Sin embargo, no fueron censuradas con los odiosos nombres de asonadas, conmociones populares ó juntas tumultuarias del populacho. Lejos de destruir la Constitucion y las leyes, se propusieron darles vigor y energía, desterrar los abusos, consolidar los derechos nacionales, garantir el Trono y resistir al despotismo de los ministros, grandeza y alto clero.

El objeto de las reuniones verificadas en 1315 fué, segun ellas mismas dicen, «para guarda de nuestros cuerpos é de lo que habemos, é para que se cumpla é faga justicia é vivamos en paz é en sosiego.» Las que se establecieron en Castronuño en 1469 dicen que aquella hermandad «fué establecida é ordenada para ejecucion de la justicia, del bien público de estos regnos é conservacion de la Corona Real.» La Junta de Villacastin de 1473 dijo: «Facemos et celebramos hermandad porque entendemos que es cumplidero así al servicio de Dios é del Rey nuestro Señor, é á pro é bien comun de estos regnos é á la seguridad et guarda é defensa de todas las personas.» Las de Toledo, cuando se reunieron en Avila, concluyen su proclama respondiendo oportunamente á las personas á quienes llenan de espanto semejantes asociaciones; porque sus argumentos eran los mismos que á pesar de las luces del siglo aun se oyen en la actualidad. «No pongais excusa, señores, diciendo que en los regnos de España las semejantes congregaciones y juntas son por fuero reprobadas, porque en esta santa Junta no se ha de tratar sino del servicio de Dios: lo primero la fidelidad al Rey; lo segundo la paz del Reino; lo tercero el remedio del Patrimonio Real; lo cuarto los agravios hechos á los naturales; lo quinto los desafueros que han hecho los extranjeros; lo sexto la tiranía que han inventado algunos de los nuestros; lo sétimo las imposiciones y cargas intolerables; de manera que para destruir estos siete pecados se inventen siete remedios en esta santa junta. Parécenos, señores, que todas estas cosas tratando, y en todas ellas remedio poniendo, no podrán decir nuestros enemigos que nos amotinamos con la junta, sino que somos otros tantos Brutos de Roma, redentores de su Pátria; de manera que de donde pensaren los malos condenarnos por traidores, de allí sacaremos renombre de inmortales para los siglos venideros.»

Estos hombres se propusieron defender la justa causa de la libertad, dice el Sr. Marina en su inmortal obra, y arrostraron heroicamente todos los peligros de la empresa. Nada fué capaz de acobardarlos, ni de inspirar sobresalto ó temor en sus pechos; ni las contradicciones de los poderosos, ni los falsos razonamientos de los inertes y cobardes, ni el mal ejemplo de los egoistas, ni la artificiosa y sagaz conducta de los palaciegos, ni el vil temor de desagradar á los déspotas, ni la vulgar opinion que condenaba su conducta de atentado contra la magestad y autoridades establecidas. Superiores á estas preocupaciones, todos sentian lo mismo que en 1520 es-

cribió la ciudad de Toledo á las restantes del Reino: «Presupuesto que en lo que está por venir todos los negocios nos salieran al revés de nuestros pensamientos, conviene á saber, que peligrasen nuestras personas, derrocasen nuestras casas, tomasen nuestras haciendas, y al fin perdiésemos todos las vidas; en tal caso decimos que el disfavor es favor, el peligro es seguridad, el robo es riqueza, el destierro es gloria, el perder es ganar, la persecucion es corona, el morir es vivir, porque no hay muerte tan gloriosa como morir el hombre en defensa de su república.»

Estas hermandades, reunidas en todas las convulsiones políticas para resistir el sistema opresivo, eran aprobadas por las Córtes, y siempre fueron consideradas como legítimas, á no ser por los enemigos de la libertad. Cuando las Córtes se reunieron en Búrgos en 1315, los individuos de la hermandad les pidieron que jurasen hacer guardar y cumplir el cuaderno de ordenanzas de la hermandad, y aquellas, sin la menor resistencia, accedieron á dicha solicitud. Las Córtes de Carrion en 1317 aprobaron y respetaron los acuerdos y determinaciones de las hermandades de Búrgos, Cuéllar y Carrion.

Quando aun existiese alguna duda contra la legalidad de semejantes reuniones, nos la deberian desvanecer completamente las razones expresadas en la carta que Enrique IV escribió á la hermandad reunida en 1465. «Dado vos es, dice, el poderío de Dios; por tanto, quien quisiere puede razonar en cualquier ayuntamiento, quanto aquello que se trata más general se demuestra, y tanto de aquello entre ellos disputar, quanto el comun interés lo toma en cabsa propia; porque allí donde en bien comun el bien ó el mal se trata, quien quiera tiene la licencia de llegar á dar su voto, como sea cosa cierta que la mesma propiedad hace á cada uno juez de lo suyo, é presta osadía de hablar en guarda de su derecho. Por ende, padres conscriptos é honorables señores, oidas las nuevas de vuestras congregaciones, como por la voluntad de Dios erades ayuntados para redimir é reparar las grandes tiranías; ¿quién fuera poderoso en santa conformidad á juntar tan grandes gentíos, si la mano de aquella soberana bondad por su infinita clemencia en ello no pusiera su gracia? Los cuales unidos en deseo tan católico, allegados con deseo tan noble, fechos tan conformes en deseo tan justo, de tan diversas voluntades tornadas en una, de tan varios corazones en un querer, é todos finalmente tras un virtuoso fin agui-sando, bien parece sin duda lo tal ser descendido del cielo, ó propio nombre de santa hermandad haber alcanzado. ¡Oh bienaventurados los dias en que tal obra se hizo, y tiempos dignos de gloria que tal merced recibieron, que levantase Dios á los bajos en confusion de los mayores, dispertase los flacos en vergüenza de los fuertes, é privase de consejo á los grandes para darle á los chicos! Podremos por ello decir cantando con el profeta: aqueso es fecho por Dios y es maravilloso en nuestros ojos: mas vosotros, honorables señores, á quienes dispertó la virtud para reparo de tantos males, salid con vuestros pendones, despléguese las banderas, que diez sobrepujarán á ciento, é ciento serán mil, é mil vencerán á todos, que si vosotros no fuerades, ya dejara de ser Castilla, si vos no vos levantades agora, ella cayera por siempre, é si vos no despertades, ella sin duda dormirá.»

Todos estos datos, igualmente que la ley de Partida cuya cita parece á la comision una paradoja, expresan y reconocen en términos claros é indudables la legiti-

midad de estas asociaciones, y se puede desafiar con seguridad á que se cite una sola ley, hecha en Córtes, que las desaprobe. La comision, despreciando la cita de la ley 10, página 2, título I, se funda únicamente en que no es esta la vez primera que se ha abusado del texto de las leyes para apoyar actos contrarios á su verdadero sentido. por lo que se vió turbada la seguridad del Estado. Aun cuando esta asercion no fuese demasiado vaga, yo no puedo persuadirme que sus autores ignoren que mucho más comunes son los casos en que se ha acudido á este subterfugio por los enemigos de la libertad, sin que este fundamento pueda por ningun pretesto servir de razon para establecer la ley que nos presentan. Mas si atendemos á lo que la misma comision nos dice, cuando en seguida asegura que la ley invocada para el sosten de las sociedades, literalmente tomada, no es más que un retazo copiado de las obras políticas de Aristóteles, en donde se da la definicion del tirano usurpador de los Tronos y se hace la descripcion de las malas mañas que emplea para sostenerse, tales como la persecucion de las letras, el empobrecimiento de sus esclavos, la prohibicion severa de toda reunion, etc., prueba precisamente la idea contraria á la que ha querido expresar. Si la ley no venia al caso, ¿por qué, para desecharla por importuna, alegar que es un retazo de las obras de Aristóteles? Y si viene al caso, ¿por qué decir que no es la vez primera que se ha abusado del texto de las leyes para apoyar actos contrarios á su verdadero sentido, por lo que se vió turbada la seguridad del Estado?

Antes de concluir responderé al principal y único argumento en que se apoyan los enemigos de estas públicas y libres reuniones de los ciudadanos; á saber: las convulsiones políticas ó conspiraciones que pueden causar trastornando el Estado. Suponiendo ciertos todos esos males con que se nos pretende arredrar, los que se seguirian de la total supresion de las asociaciones patrióticas serian mucho mayores, pues que infaliblemente perderiamos la libertad; y en la alternativa de dos males, el menor nunca puede ser una objeccion para el que sabe calcular. Los establecimientos humanos más sábiamente meditados no llegan á ser tan perfectos que no tengan algunos vicios y defectos irremediabiles, capaces de abrir la puerta á mayores abusos; pero no por eso los debemos condenar. La libertad misma de la imprenta, sancionada por la ley como uno de los derechos más preciosos de todo español, ¿á cuántos abusos, aun mucho mayores que los que pueden seguirse de las asociaciones, no se halla expuesta? A pesar de sus abusos, ¿cuál seria hoy el que para evitarlos tratase de privarnos de tan precioso derecho?

Pero dejando á un lado la hipótesis, yo estoy convencido por lo que la historia nos enseña, sin olvidar lo acaecido en Francia, que tales temores son enteramente ridículos. En los países en que se gozó y en que se goza de la libertad de reunirse los ciudadanos para discutir sobre materias públicas y políticas, el interés particular se halla tan estrechamente ligado con el interés general, que la mayoría de los individuos procura que el crimen jamás quede impune; y de este modo ni el delincuente ni el maligno nunca pueden tener muchos secuaces y prosélitos en un gobierno justo. Es innegable que entouces el hábito de pensar, la necesidad misma de ocuparse en los asuntos públicos y la facultad de criticar las operaciones del Gobierno dan á los ciudadanos más vigor, más dignidad y más firmeza: es constante que entouces la energía de sus espíritus se comunica á sus co-

razones; mas no hay que temer ni que formen conspiraciones y empresas criminales, ni aun cuando tratasen de formarlas, que sean auxiliados por sus conciudadanos.

Su objeto se limitará únicamente á asegurar y buscar medios de mejorar las leyes, y á reclamar su cumplimiento. Las conmociones que produce esta libertad son siempre el espíritu conservador de la Constitution. No pasan de una ligera fermentacion que, en vez de ser perjudicial, es utilísima al procomunal; es indispensable para que se rectifique la opinion general, y es necesaria para que se prevengan los excesos á que caminaria todo Gobierno si no hubiese esta vigilancia de parte de todos los interesados. Jamás los fundamentos de la sociedad están más fuertes, ni más distantes las guerras civiles y las conspiraciones, que en los países en que hay esta libertad de las reuniones, las cuales solo producen aquella útil fermentacion sin la cual los pueblos inmediatamente pasarian á aquel estado de inercia é inmovilidad, compañeras inseparables de la esclavitud. Sus movimientos son los naturales de todo cuerpo vigoroso y que tiene mucha vitalidad: no son las convulsiones terribles de un cuerpo moribundo, como equivocadamente se quiere suponer. Las facciones terribles de los Marios y Silas no se forman en la publicidad ni en los países que gozan de libertad: se verifican únicamente en países en que el Gobierno es duro é injusto, y cuando se puede presentar como base alguna injusticia muy chocante de éste. Mientras el Gobierno sea justo, no hay que temer facciones. Entonces los intereses del Estado y del ciudadano no forman más que un mismo interés; y seria necesario suponer loca á la mayoría de la sociedad para suponer que contrariaria sus intereses porque tuviese libertad de hacerlo; y tan absurdo destruir esta libertad como lo seria promulgar una ley que prohibiese á los ciudadanos el uso de un cuchillo por temor de que se matasen á sí propios.

En Rusia, Pedro, llamado allí el Grande, hizo una ley por la que ordenaba que ninguno pudiese representar al Emperador en derecho sin haber acudido antes con solicitud á dos Ministros sucesivamente; y en la misma ley se ordenaba que ningun memorial, aun de los presentados al Ministro, llevase las firmas de más de 10 individuos. Esta segunda parte de una ley tan tiránica infaliblemente vendrá á ser el resultado indirecto de la destruccion de las asociaciones.

La legislacion inglesa con respecto á las asociaciones, que son de dos especies, á saber: asociaciones puramente para discutir, y asociaciones para discutir y hacer peticiones para el Gobierno ó para el Parlamento, se reduce á lo siguiente. En aquellas no se puede discutir ninguna cuestion ó punto sin que se publique con cuatro dias de anticipacion el asunto de que se ha de tratar, poniendo para la publicacion carteles en sitios señalados por la ley: esto solo parece suficiente para evitar toda mala consecuencia, pues el Gobierno y autoridades subalternas, teniendo noticia anticipada, no son sorprendidos, y tienen tiempo para tomar medidas si se prevé que pueda resultar algun riesgo. Estas asociaciones es necesario que se reúnan en un edificio, porque á campo raso las prohíbe la ley. Las asociaciones de discutir y hacer peticiones no pueden reunirse sin que preceda el permiso de la autoridad, pedido en un memorial firmado por 12 propietarios. Cuando la autoridad niega el permiso sin más motivo que su capricho, la ley no le impone pena alguna, pero pierde la popularidad; y en este caso la asociacion puede reunirse, siendo entouces

responsables á todas las consecuencias los 12 que habian firmado.

Pido, pues, que las Córtes determinen que el dictámen presentado vuelva á la comision.

El Sr. SOLANA: Aunque la variacion hecha en el artículo 3.º del dictámen de la comision por el Sr. Alvarez Guerra, individuo de la misma y autor de la indicacion que ha dado lugar á tratar de asunto tan interesante, lo ha modificado algun tanto, no por eso ha variado en manera alguna la opinion que tengo formada sobre la totalidad del proyecto. Seré breve.

El dictámen que se discute, extendiéndose á considerar los abusos que pueden originarse de las sociedades patrióticas, olvida dos cosas que aconsejan la conservacion de dichas asociaciones, á saber: el derecho que asiste á los ciudadanos de una nacion libre de reunirse pacíficamente, y la utilidad grandísima que resulta de la saludable agitacion que recibe el espíritu público en semejantes reuniones. Si, pues, al querer precaver un abuso, posible sin duda, las Córtes atropellan un derecho y privan á los ciudadanos de una ventaja, las Córtes obrarán, en mi sentir, con poca justicia y peor consejo.

He dicho que á los ciudadanos asiste un derecho para reunirse, y se me objetará que este derecho no está expresamente reconocido en la Constitucion. No hay duda que es así, y que no se halla en ella declarado como el de usar de la libertad de imprenta. Pero á mi entender, el artículo que asegura á los españoles la libertad civil, les asegura el derecho de asociacion, parte principalísima de ella. La libertad, segun la define Benjamin Constant, uno de los mejores publicistas modernos, no es otra cosa que lo que los individuos tienen derecho de hacer y la sociedad no tiene facultad de reprimir. En este último caso se hallan las reuniones, y todos los demás usos de nuestras facultades que no perjudican á tercero. Puede no reconocerse en estas reuniones el título de sociedades, y no admitirse sus representaciones sino como la expresion individual de los que las firman; pero impedir que las reuniones se verifiquen, es injusto en mi concepto. Si en ellas se comete algun delito ó algun grave yerro, debe castigarse ó reprimirse el exceso, mas nunca negando la facultad, sino condenando el uso hecho de ella.

Esta doctrina es la seguida en los países donde la libertad reina en toda la plenitud de su poder, y yo creo que en este caso se halla nuestra España. En Inglaterra se siguió por muchos años; y si algunos Ministros indujeron al Parlamento á hacer leyes coartando el derecho de asociacion, fueron Ministros conocidos por su aversion á la libertad de sus compatriotas y á la de todos los demás pueblos, y dichas leyes no se hicieron sin una fuerte oposicion de los verdaderos liberales. En Francia las sociedades tuvieron la misma fortuna que las instituciones útiles. Reducidas á sus justos límites en los primeros y mejores dias de su revolucion, pasaron á ser anárquicas y dominadoras cuando todo en aquel país era anarquía; y ahora han parado porque la libertad no está allí ni bien definida ni bien asentada.

En España las sociedades nacieron con la revolucion que produjo el restablecimiento de nuestro Código. Hijas del espíritu de libertad que en aquella época inflamaba la Nacion, tuvieron un puro y noble origen. Formáronse, es verdad, contra lo que previenen algunas de nuestras leyes antiguas; pero ni faltan entre estas mismas leyes algunas que aprueban asociaciones de clase semejante, ni deben estas leyes ser atendidas cuando reinan

otras de índole muy diversa. La Constitucion no ha derogado nuestras leyes civiles y criminales, mas sí nuestras leyes políticas, excepto aquella parte que forma la esencia de la Constitucion misma. Parece, pues, ajeno de la sabiduría de las Córtes buscar en nuestro Código las leyes que sancionaban nuestra servidumbre, y de entre las mismas que están en más disonancia y aun oposicion con nuestras nuevas instituciones, ir á escoger y dar fuerza á una, y no la única que prohíbe todo linaje de reuniones inocentes. Este proceder es injusto, es des-acertado. Los derechos del hombre son la base de toda Constitucion libre: la Representacion nacional no debe coartarlos so color de impedir que de ellos se abuse.

Probado pues, segun mi entender, que las Córtes en prohibir las sociedades atropellarian un derecho, veamos si no privarian al mismo tiempo á la Nacion de una cosa útil. Verdad es que lo primero envuelve lo segundo, y que la privacion de un derecho de los hombres libres no solamente es injusta, sino tambien perniciosa; pero yo voy á considerar bajo otro aspecto la cuestion. Aun concediendo que el derecho de asociacion fuese dudoso, me parecen tan útiles las sociedades patrióticas, que clamaria por su establecimiento si no existiesen.

No se persuadan las Córtes que al opinar por que subsistan las sociedades tomo en consideracion los servicios prestados por ellas á la causa de la libertad y la Constitucion: nada de eso: tales servicios pueden hacerlas merecedoras de la gratitud nacional, pero nada prueban en favor ó en contra de la cuestion acerca de la conveniencia de que continúen. Tambien las Juntas gubernativas de las provincias hicieron servicios, y ni yo ni nadie querria por eso que ahora permaneciesen. No pues los pasados méritos de las sociedades, sino su utilidad presente, debe considerarse para decidir acerca de su conservacion ó su fin. Esta utilidad, á mi parecer, está bien á la vista. Ellas fomentan el espíritu público: ellas acostumbra á los españoles á tratar de materias políticas: en ellas el pueblo se ilustra muchas veces, y siempre se aficiona á la libertad y á ocuparse como en causa propia en la causa del Estado. No todos saben, no todos pueden leer; pero todos oyen y entienden bien ó mal, y al cabo comprenden que la Constitucion es buena porque es útil: que la libertad es un bien, y que no deben dejarla perder si quieren ser felices. A todos los pueblos son útiles estas lecciones; pero singularmente al español, hasta ahora indolente por efecto de los hábitos de la servidumbre en que ha vivido. El pueblo español há menester para andar por la senda de la libertad, más espuela que freno. Hay además otra razon por la que yo quisiera, en vez de acabar con las sociedades, multiplicarlas. Sabido es que al emprender útiles reformas las Córtes se ven precisadas á chocar con algunos intereses. Sabido es que estos intereses son defendidos alguna vez en el púlpito, abuso imposible de extirpar completamente. Para contrarestar la influencia de éste, cuando torcido de su destino se convierta á tratar puntos de política, es preciso lidiar con iguales armas; con las de las oraciones populares, más eficaces que los escritos.

Estas razones poderosas aconsejan la existencia de las sociedades: razones que tienen igual fuerza mientras está reunida la legislatura que mientras están suspendidas sus sesiones. Es, á la verdad, en este punto notablemente contradictorio el dictámen de la comision. Dice que las sociedades eran útiles ínterin no estaba reunido el Congreso, y que al abrirse éste debieron disolverse; y añade despues que si las sociedades han osado desmandarse estando las Córtes reunidas, es de temer que

se propasasen á más cuando ellas cesasen. Yo creo que las sociedades, como no pueden atreverse á compararse con la Representacion nacional, no tienen por qué suplir su falta; y que siendo sus operaciones de clase muy inferior á las de las Córtes, tanto bien pueden hacer en la ausencia como en la presencia de éstas.

Concluyo, pues, suplicando á las Córtes que, lejos de aprobar el dictámen de la comision, consideren que en nuestra situacion actual, ya se mire con referencia á nosotros mismos, ya con referencia á los extraños que nos observan, no conviene que retrocedamos en la senda de la libertad por que vamos caminando. Sigamos con paso firme y no acelerado, y cuidemos de no desvanecer las esperanzas de los buenos ni alentar las de los malos. Contra estos, es decir, contra los enemigos de la libertad, no es contra quienes se encamina el proyecto de la comision; que no fué en sociedades patrióticas donde se tramaron las conspiraciones de Búrgos, de Múrcia y otros puntos. Es sí contra los amantes de la libertad, cuyo celo debe ser contenido si se extravía, pero no sofocado. Para conseguir lo primero, las autoridades locales debian observar las sociedades y reprimir hasta por la prision á los que en ellas se desmandasen. Podia asimismo, para que las sociedades no adquiriesen influjo gubernativo, aprobarse el art. 4.º del dictámen de la comision; pero los otros tres tienen mi voto en contra: el 1.º por supérfluo, y el 2.º y 3.º como destructores de una libertad justa y como perjudiciales á los intereses de mi Pátria.

El Sr. **LA-SANTA**: Yo habia pedido la palabra para hacer algunas observaciones acerca del proyecto que la comision ha presentado, y cabalmente al oír al Sr. Alvarez Guerra he visto que en lo más sustancial disiente del dictámen de la comision. Pero ni en este voto ni en el dictámen de la comision veo determinado el modo con que se quiere que se rijan de nuevo estas sociedades. A primera vista parece que se quiere que subsistan estas corporaciones, y al mismo tiempo se impone una responsabilidad al Gobierno que las permita. Digo corporaciones porque si no, ¿sobre quién y por qué ha de recaer esta responsabilidad? Creo que no solo no debe haber esta responsabilidad, pero ni aun se debe decir «que concederá permiso:» juzgo que basta que tenga conocimiento la autoridad local, para que quede como debe esta parte del artículo. Si no hay sugetos conocidos que formen estas corporaciones, ¿quién ha de pedir este permiso? ¿Quién es el que ha de dar parte de esta reunion? Yo quisiera que los señores de la comision ó alguno de ellos me satisficiera en este punto. O ha de haber una corporacion con cierto número de sugetos conocidos, y entonces está bien que esta asociacion, sociedad, corporacion ó como quiera llamarse, esté bajo la vigilancia del Gobierno, tomando conocimiento de su existencia la autoridad local, ó si no, me parece que es absolutamente extraña esta cláusula, porque no hay ente sobre que recaiga este conocimiento que se dice debe tomar. Porque si así en público como privadamente es permitido á todos los españoles hablar de materias políticas, siempre que no contravengan en ello á alguna ley, ¿para qué es este conocimiento? Y por consiguiente, no subsistiendo ninguna corporacion, no veo que haya posibilidad de pedir este permiso, y mucho menos juntándose en un sitio público, y reuniéndose hoy unos y otros mañana. Si fuese en una casa particular, tal vez podria obligarse al dueño á pedir el permiso, porque al fin, ya era una persona conocida, aunque para hablar de materias políticas todo el mundo está autorizado.

Por lo demás, me parece que las razones en que apo-

ya la comision su dictámen no tienen mucha fuerza, al menos para mí, porque la comision dice que estas asociaciones hicieron servicios importantísimos, fueron útiles y aun necesarias en algun tiempo, pero no ahora, que ya han dejado de ser convenientes. Mas para probar esto no veo yo que dé razones; y en mi juicio, no dándose por la comision razones que me convenzan de ello, creo yo que antes de la reunion de las Córtes eran mucho menos necesarias y más peligrosas que ahora. Eran menos necesarias, porque entonces no habia que hacer más que seguir la senda que marcaba el sistema establecido ocho años hacia, observando los decretos de las Córtes extraordinarias y ordinarias del año 14, porque los pueblos, habiendo manifestado sus opiniones, estaban más que preparados para recibir el nuevo sistema: y así, no veo yo la necesidad de que hubiese estas corporaciones. Aun cuando se quisiera decir que habia necesidad de hacer algunas novedades ó reformas, entonces no era tiempo, porque estas las debian hacer las Córtes, como en efecto las han hecho. Por consiguiente, creo yo que ahora son más necesarias estas reuniones que lo fueron en aquel tiempo. Ahora se están haciendo reformas y estableciendo leyes, para lo cual es muy conveniente que se ilustren clases enteras de la sociedad, haciéndoles conocer con claridad las ventajas de dichas reformas y leyes.

Se ha alarmado á una gran porcion de individuos solo con dos leyes, á saber: las de mayorazgos y monacales. Se ha decretado el levantamiento de los estancos desde 1.º de Marzo próximo, medidas que han de ocasionar que muchos de los individuos interesados en ellos se declaren enemigos del sistema, porque el interés y el espíritu de corporacion ha de estar chocando precisamente con él. Por lo cual me parece que serian ahora más necesarias estas corporaciones, que lo fueron antes de la reunion de las Córtes.

Que entonces fueron más peligrosas que ahora, es claro por muchas razones, y por el hecho de que despues de reunidas las Córtes no ha habido quejas contra ellas. Entonces el Gobierno estaba sin opinion, y solo su prudencia y la de la Junta provisional, que aconsejaba á S. M. lo que debía hacer, fueron los que pudieron sostener este, digámoslo así, interregno, en que, como más vacilante la autoridad, eran más peligrosas estas corporaciones; pero ahora, despues de restablecido el sistema constitucional en toda su extension, despues de haber recobrado el Gobierno toda su opinion y toda su energia, ¿qué peligro puede haber en que existan estas sociedades? Yo á la verdad no sé que haya alguno; pero conozco que aun cuando pueda haberle, siempre tiene que ser menor que en la primera época. Yo no me hallaba entonces aquí; me hallaba en Nápoles, en donde leí los periódicos, y por ellos supe los primeros pasos de nuestra revolucion. Por estos periódicos que llegaron á mis manos, ví alguno de los pasos dados por estas sociedades, que no me parecieron bien. Pues ¿á quién habia de parecer bien que estas corporaciones por sí, sin autorizacion alguna, enviasen diputaciones al Gobierno y á la Junta provisional? Pero esto ¿se ha visto despues de reunido el Congreso? No, Señor. Por lo mismo que ha tomado el Gobierno toda la fuerza y energia que le son propias y que debia tomar, estas reuniones, aunque la costumbre pudiera haberlas avezado á hacer algunas cosas impropias y dar pasos arriesgados, ellas mismas se han detenido y se han reducido á los límites que deben tener. Y aun cuando han representado alguna vez al Congreso, se les ha dicho que representen inscribiendo

sus nombres los individuos que hacen la exposicion, con tal que no aparezcan como corporacion por no estar autorizada por la ley. Decir que no deben subsistir estas sociedades por temor de lo acaecido con otras en las naciones vecinas, no tiene fuerza ninguna, porque no hay punto de comparacion entre aquellas y las nuestras. Todo el mundo sabe que en los clubs de Francia habia un gran número de individuos de los que componian el Cuerpo legislativo y despues la Convencion, que pertenecian ya á una, ya á otras de semejantes asociaciones, adonde se preparaban los trabajos que se habian de aprobar en la Convencion; y por consiguiente, ésta no podia dejar de participar de las pasiones de los individuos de dichas sociedades, las cuales por lo mismo habian de tener con precision una influencia muy directa en el Cuerpo legislativo; pero aquí es muy diferente, porque no hay ningun Sr. Diputado miembro de tales asociaciones, al menos que yo sepa. Pues si no le hay, ¿qué influjo pueden tener en el Congreso ó en el Gobierno tales reuniones? Yo por mi parte sé decir (y habrá otros muchos Diputados en el mismo caso) que no sé lo que han tratado, y menos he asistido á ninguna de ellas; y por consiguiente, ningun influjo han tenido, ni poco ni mucho, en las deliberaciones del Congreso ni en las providencias tomadas por el Gobierno. Yo no veo, pues, una razon de comparacion entre nuestras sociedades y las francesas, que tan funestas fueron á aquella nacion.

Fija por razon la comision que no aparece que entrasen en el plan de la Constitucion más Juntas que las parroquiales, las de partido, ni más corporaciones que los ayuntamientos y Diputaciones provinciales; pero yo le respondo: si estas Juntas y corporaciones son parte del Gobierno, ¿no habian de entrar como elementos de la Constitucion? La comision en esto parte de un principio equivocado, á saber: que quiere que todo cuanto los ciudadanos puedan y deban hacer esté sancionado por la Constitucion: yo digo que todos los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no esté prohibido por las leyes. El traer ahora las leyes del siglo XIII no tiene que ver con el presente asunto: el tiempo ni la época á que se refieren tales leyes, no son un argumento que convenza, porque estas mismas leyes han debido cesar luego que se estableció la Constitucion, como opuestas á la libertad individual y pública; y aun cuando no fuera así, no pueden traerse como argumento para que dejen de existir tales asociaciones. Otra razon en que se funda la comision, es en que siendo el principal instituto de estas sociedades la ilustracion y extension de las luces para el conocimiento de la Constitucion, por la misma se prueba que á ellas no corresponde tal cosa, pues queda vinculada su enseñanza en las Universidades. Yo no veo esto en el art. 368 de la Constitucion. Se dice en él... (*Pidió el Sr. Gareli que se leyese, á lo que contestó el orador: «Accedo muy gustosamente á la demanda del Sr. Gareli;» y siguió*): Lo que expresamente dice este artículo es que se enseñe en las Universidades; pero sin vincular la enseñanza en ellas. Vincular una cosa es dar un derecho exclusivo á una persona ó corporacion para que ella y no otra pueda hacer aquella sobre que recae la vinculacion: prueba de que no ha sido el ánimo de la Constitucion dar este derecho exclusivo á las Universidades, es que el Gobierno ha mandado que se enseñe en los púlpitos por los curas párrocos y en las escuelas por los maestros de primeras letras. (*Se leyó el art. 368.*) Es claro que se debe enseñar en las Universidades la Constitucion; pero jamás ésta pensó en vincular en ellas su enseñanza: y repito que es buen argumento lo mandado

por las mismas Córtes generales y extraordinarias, por las ordinarias pasadas y por las presentes, de que se enseñe por los párrocos y por los maestros de primeras letras. Tambien se dice algunas líneas más arriba del dictámen de la comision (*Leyó*). Aquí, pues, antes de decir que vincula la enseñanza en las Universidades, quiere dar á entender que no se puede enseñar sino donde y como esté determinado por la Direccion de estudios, bajo la autoridad del Gobierno; y no es así. No hay más que leer los primeros artículos del proyecto presentado ahora por la comision de Instruccion pública para el arreglo de la enseñanza, y nos desengañaremos.

En los dos primeros artículos se trata de la enseñanza costeada por el Estado, ó dada por alguna corporacion con autorizacion del Gobierno, y dice que esta será uniforme, y uno mismo el método y los libros que se destinen á ella; pero por esto ¿acaso se priva á los ciudadanos que quieran enseñar particularmente? No, Señor. En el art. 4.º se dice que lo dispuesto en los anteriores no se entenderá en manera alguna con la enseñanza privada, la cual queda absolutamente libre. La Junta de instruccion pública nombrada por el Gobierno acaba de proponer ahora un plan interino para la enseñanza; ¿y podrá decirse que nadie puede enseñar sino con arreglo á dicho plan? No, Señor. En este plan se trata de uniformar la enseñanza de las Universidades, para lo cual ha propuesto los libros que en todas se deban enseñar; pero ¿prohibe por esto que particularmente se enseñen por otros? El Jacquier ha sido elegido para filosofía; ¿y qué no hay otros mejores autores para enseñarla que el Jacquier? Sí, Señor, los hay; pero ó bien porque no haya suficientes ejemplares, ó porque aun no estén traducidas las obras que se deban dar, se ha señalado éste: ¿y por esto no podrá enseñar ninguno privadamente por otro más claro y más análogo á los conocimientos filosóficos que en los jóvenes se deben inspirar? Finalmente, puede hacerse todo aquello que no está prohibido por la ley: estas reuniones no lo están por ninguna; luego deben estar permitidas. Ahora, si son convenientes, ó no lo son, esto ya es otra cosa, y debe ser el objeto de la discusion. Yo no hallo en ninguno de los artículos de este proyecto que se diga nada de esta inconveniencia. El 1.º le veo inútil absolutamente; y aun me parece vergonzoso el que se diga que todos los españoles tienen libertad para hablar en materias de política. Esta no es una novedad que debia habernos presentado la comision, porque aun antes de establecerse la Constitucion, y en el gobierno más absoluto, nadie hubiera negado esta facultad á los ciudadanos; mucho menos podrán dudar ahora de ella. Por consiguiente, veo este artículo absolutamente inútil, y como tal debe suprimirse. El 2.º quita las sociedades por las razones que ha expuesto el Sr. Alvarez Guerra, á saber: porque estas corporaciones no deben tener otro reglamento que el órden. Y digo yo: cuando se les diese un reglamento que conspirase á tener órden, ¿no seria conveniente el dejarlas? Si el reglamento tendiese á otra cosa, yo soy el primero que le reprobaria; pero ¿qué inconveniente hay en que por él se establezca un presidente que ponga órden, y diga, ahora habla uno, despues habla otro, porque si no seria una confusion? Por consiguiente, pudiendo dárseles reglamentos que conspirasen á evitar la confusion y á poner órden, deberian dárseles, y este artículo podria suprimirse, ó explicarse de otro modo. El 3.º exige la responsabilidad al Gobierno. Esta es una cosa que me ha causado suma extrañeza. Sea que esta responsabilidad la exijan las

Córtes al Gobierno supremo, ó sea que éste la exija á las autoridades locales, ¿sobre qué ha de recaer esta responsabilidad?

Dias pasados se le queria exigir la responsabilidad sobre un juicio que formase; y nunca he oido que se pueda exigir por juicios que formen los hombres. La responsabilidad se le exigirá por las órdenes que haya dado, si son contrarias á la Constitucion, ó por actos positivos; pero no por juicios que haya formado. En nuestro caso veo que se quiere lo mismo. ¿Y qué haria el Gobierno para evitar la responsabilidad? Haria un reglamento, el que ahora deberia haber hecho la comision; lo presentaria á las Córtes; y éstas dirian: bien hecho está; pero exigirle responsabilidad por lo que puede suceder una noche en una de las sociedades, no lo veo justo. Y por consiguiente, prescindiendo ahora de lo poco conforme que este proyecto está con la proposicion que dió motivo á él, y á la resolucion que recayó de las Córtes, me parece que lo que deberia hacerse era que volviese de nuevo á la comision, para que con presencia de todo lo expuesto, añadiese otros artículos al 4.º, que es el único que conspira á hacer el reglamento que la pidieron las Córtes, y nos le presentase de modo que asegurase á los ciudadanos la libertad de ilustrarse con discusiones políticas, evitando los abusos, que fué el objeto de la proposicion que ha dado motivo á esta discusion, y de la resolucion de las Córtes. Una buena prueba de que su intencion no fué jamás la de que se suprimiesen las reuniones de los ciudadanos, aun en aquel dia aciago, es el que habiendo inmediatamente despues de admitida á discusion, hecho un Sr. Diputado la indicacion de que suspendieran las sociedades sus reuniones hasta que se les diese el reglamento, las Córtes casi unánimemente la desecharon, y ni aun se admitió á discusion.

Cuando las Córtes nombraron esta comision, me parece que no fué otro su espíritu, sino el de formar un reglamento para que subsistiesen estas sociedades, evitando por él los abusos en que podian incurrir. Yo no me contentaré con decir, como el Sr. Gareli, que por tomar estas sociedades la voz del pueblo hicieron mal;

no, Señor: añado que fué una impostura. El Congreso, que es donde se hallan los Diputados de los dos hemisferios, es el que puede decir que representa al pueblo y á la Nacion; pero una pequeña asociacion llamarse el pueblo y tomar su voz para dirigir representaciones á la Junta provisional, y precisar al Gobierno á hacer esto ó lo otro, no puede menos de calificarse de atentado: mas esto ¿puede ser motivo para quitarlas? Pues qué, si con estos defectos fueron útiles y necesarias en aquel tiempo, ¿no lo serán más ahora, que aunque principiada, no se ha concluido la revolucion? ¿Ahora que se están haciendo las reformas, y ahora que resucitan los enemigos de la Constitucion, y nos vemos rodeados de peligros, como se nos quiere decir? Si entonces eran necesarias para excitar el espíritu público, ¿prestarán ahora menor servicio sosteniéndole, y procurando por medio de la ilustracion que el pueblo no se extravíe dando oidos á los enemigos de las Córtes? Pues si esto es en el interior del Estado, ¿qué será mirando al exterior? Y qué, ¿podemos prescindir del estado crítico en que se halla la Europa? Todos los papeles públicos nos están anunciando reuniones de soberanos, aparato de guerra, y que quizá quizá está muy próximo el momento de tirar el primer cañonazo; y si esto sucede, ¿se podrá calcular la extension de este movimiento, ni en qué vendrá á parar? Y pregunto yo: ¿seria conveniente que en tal estado, cuando más necesitamos sostener el espíritu público, comprendiendo las Córtes cuán á propósito son estas sociedades para formentarle, en vez de darles un reglamento que sirviese para su mejora, de un golpe se echasen abajo, perdiendo la Nacion los servicios que podian prestar? Ultimamente, Señor, mi voto seria que volviese todo el proyecto á la comision, para que añadiendo otros artículos al 4.º que ha presentado, reglamentase estos cuerpos, ó dijese cómo habian de subsistir de modo que fueran útiles y sirviesen para ilustrar al pueblo, formando así el espíritu público, que tan necesario es á la Nacion.»

Quedó pendiente la discusion.

Se levantó la sesion.